

Edición  
en lengua española

## Comunicaciones e informaciones

<u>Número de información</u>	Sumario	Página
	I <i>Comunicaciones</i>	
	<b>Comisión</b>	
1999/C 280/01	Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus pactos de recompra 2,50 % a 1 de octubre de 1999 — Tipo de cambio del euro .....	1
1999/C 280/02	Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 (antes artículos 92 y 93) del Tratado CE — Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones .....	2
1999/C 280/03	Ayudas estatales — Francia <sup>(1)</sup> .....	3
1999/C 280/04	Ayudas estatales — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 (apartado 2 del antiguo artículo 93) del Tratado CE, sobre la ayuda C 13/99 (ex NN 78/98) — Alemania — Actividades de Landesentwicklungsgesellschaft mbH de Turingia en el ámbito de las instalaciones industriales <sup>(1)</sup> .....	8
1999/C 280/05	Ayudas estatales — Invitación a presentar observaciones en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre la ayuda C 44/99 [ex NN 23/99 (ex N 678/98) — Medida complementaria para las ovejas (1998), y ex NN 79/99 (ex N 90/99) — Régimen de ayudas para las pérdidas de forraje de invierno (febrero de 1999)] .....	12
1999/C 280/06	Ayudas estatales — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE sobre el asunto C 33/98 (ex N 332/99 y C 33/98) — España: Nueva aportación de capital a Babcock Wilcox España SA <sup>(1)</sup> .....	22
1999/C 280/07	Ayudas estatales — Invitación a presentar observaciones en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre la medida C 55/99 (ex N 534/97) Países Bajos — Modificación de las exacciones parafiscales con las que se financian las actuales ayudas destinadas a la reducción de capacidad en el sector de los mataderos de ganado vacuno .....	24
1999/C 280/08	Ayudas estatales — Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 5 del artículo 6 de la Decisión de la Comisión nº 2496/96/CECA sobre la ayuda C 57/99 (ex N 601/98) — Ayuda para la protección del medio ambiente a Sidmar, acero CECA <sup>(1)</sup> .....	29

<u>Número de información</u>	Sumario ( <i>continuación</i> )	Página
1999/C 280/09	Notificación previa de una operación de concentración (asunto IV/M.1538 — DuPont/Sabanci) <sup>(1)</sup> .....	40
1999/C 280/10	Comunicación de la Comisión relativa a las licencias concedidas a empresas ferroviarias	41
<hr/>		
	II <i>Actos jurídicos preparatorios</i>	
	.....	
<hr/>		
	III <i>Informaciones</i>	
	<b>Comisión</b>	
1999/C 280/11	Anuncio a los agentes económicos en relación con las operaciones de suministro gratuito de productos agrícolas a la Federación de Rusia contempladas en el Reglamento (CE) n° 2802/98 del Consejo .....	42




---

<sup>(1)</sup> Texto pertinente a efectos del EEE

## I

*(Comunicaciones)*

## COMISIÓN

**Tipo de interés aplicado por el Banco Central Europeo a sus pactos de recompra  
2,50 % a 1 de octubre de 1999**

**Tipo de cambio del euro <sup>(1)</sup>**

**1 de octubre de 1999**

(1999/C 280/01)

<b>1 euro</b>	=	7,4335	coronas danesas
	=	328,65	dracmas griegas
	=	8,7425	coronas suecas
	=	0,6499	libras esterlinas
	=	1,0728	dólares estadounidenses
	=	1,57	dólares canadienses
	=	113,25	yenes japoneses
	=	1,5985	francos suizos
	=	8,247	coronas noruegas
	=	76,41915	coronas islandesas <sup>(2)</sup>
	=	1,6307	dólares australianos
	=	2,0688	dólares neozelandeses
	=	6,43948	rands sudafricanos <sup>(2)</sup>

---

<sup>(1)</sup> Fuente: Tipo de cambio de referencia publicado por el Banco Central Europeo.

<sup>(2)</sup> Fuente: Comisión.

**Autorización de las ayudas estatales en el marco de las disposiciones de los artículos 87 y 88 (antes artículos 92 y 93) del Tratado CE**

**Casos con respecto a los cuales la Comisión no presenta objeciones**

(1999/C 280/02)

**Fecha de adopción de la decisión:** 25.8.1999

**Estado miembro:** Bélgica (Valonia)

**Ayuda:** N 261/99

**Denominación:** Ayuda al aumento de la capacidad de almacenamiento de efluentes de la ganadería en zonas vulnerables

**Objetivo:** Indemnizar a los agricultores en zonas sensibles, que quedarán sujetos a obligaciones nuevas y específicas en virtud de los programas de actuación previstos en el Decreto del Gobierno valón relativo a la protección de las aguas contra la contaminación causada por los nitratos de origen agrario (Decreto nitratos)

**Fundamento jurídico:** Projet d'arrêté du gouvernement wallon relatif à l'octroi d'une prime à l'accroissement des capacités de stockage des effluents d'élevage en zone vulnérable

**Presupuesto:** 430 millones de francos belgas (aproximadamente 10 659 000 euros)

**Intensidad o importe de la ayuda:** Máximo 35 %

**Duración:** Un solo pago

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

[http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids)

**Fecha de adopción de la decisión:** 25.8.1999

**Estado miembro:** Austria (Alta Austria)

**Ayuda:** N 273/99

**Denominación:** Directiva para fomentar medidas de mejora de la calidad y del estado sanitario de la leche y los productos lácteos

**Objetivo:** Proporcionar ayuda financiera para medidas de control que contribuyan a mejorar la higiene y la calidad de la leche y los productos lácteos

**Fundamento jurídico:** Richtlinien des Landes Oberösterreich zur Förderung von Maßnahmen zur Verbesserung der Qualität und hygienischen Wertigkeit von Milch und Milchprodukten

**Presupuesto:** El presupuesto se fijará cada año y tendrá una financiación nacional. En 1999 el presupuesto fue de 56 millones de chelines austriacos (4,07 millones de euros)

**Intensidad o importe de la ayuda:**

— Hasta un máximo del 70 % de los costes subvencionables derivados de controles no obligatorios

— Hasta un máximo del 100 % de los costes derivados de los controles obligatorios

**Duración:** Sin determinar

El texto de la decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

[http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids)

**Fecha de adopción de la decisión:** 31.8.1999

**Estado miembro:** Países Bajos

**Ayuda:** N 339/99

**Denominación:** Renovación zonas rurales

**Objetivo:** Estimular la innovación y el desarrollo en zonas rurales. La ayuda se concede para proyectos de desarrollo, demostración e información sobre la naturaleza, las actividades recreativas, los bosques, el paisaje y la historia cultural

**Fundamento jurídico:** Stimuleringsregeling vernieuwing landelijk gebied

**Presupuesto:** 1999: 5 millones de florines neerlandeses

**Intensidad o importe de la ayuda:** Entre 50 000 y 1 millón de florines neerlandeses por proyecto. Son subvencionables los gastos de personal y de material, los servicios, y hasta un 50 % de los costes de maquinaria y equipos necesarios para realizar los proyectos. El porcentaje de ayuda ordinario será del 75 % de los costes subvencionables; cuando exista acumulación con otros regímenes de ayuda el porcentaje podrá ascender hasta el 90 % de los costes subvencionables. Cuando se trate de inversiones en explotaciones agrarias el porcentaje de ayuda será del 35 % en activos fijos y 20 % en activos mobiliarios

**Duración:** Indefinida

El texto de la Decisión en la lengua o lenguas auténticas, suprimidos los datos confidenciales, se encuentra en:

[http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state\\_aids](http://europa.eu.int/comm/sg/sgb/state_aids)

## AYUDAS ESTATALES

## Francia

(1999/C 280/03)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

(Artículo 88 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero)

**Comunicación de la Comisión con arreglo al artículo 88 del Tratado CECA y a la Decisión nº 3632/93/CECA de la Comisión, de 28 de diciembre de 1993, dirigida a los demás Estados miembros y otros interesados, relativa al régimen comunitario de las intervenciones de los Estados miembros en favor de la industria del carbón — nº 3/97, 2/98, 1/99 – Francia**

Mediante la carta siguiente, la Comisión informó al Gobierno francés de su decisión de iniciar el procedimiento previsto en el artículo 88 del Tratado CECA:

## «I. Hechos

1. Mediante notas de 31 de julio de 1997, 13 de agosto de 1998 y 10 de mayo de 1999, Francia notificó a la Comisión las intervenciones financieras que se proponía efectuar en favor de la industria del carbón con cargo a los ejercicios de 1997, 1998 y 1999. El expediente de notificación correspondiente al año 1999 incluye la notificación de los datos reales para el ejercicio carbonero de 1997.

Al haber considerado que las notificaciones presentadas a la Comisión para los años 1997 y 1998 eran incompletas, la Comisión solicitó información complementaria a las autoridades francesas mediante cartas de 2 de octubre de 1997, 9 de enero de 1998, 6 de julio de 1998 y 25 de noviembre de 1998.

2. Se informó a Francia en varias ocasiones de las dificultades que encontraba la Comisión para autorizar las ayudas destinadas a la industria del carbón desde 1997.

La Comisión envió asimismo una carta, con fecha de 20 de enero de 1999, exponiendo brevemente el análisis jurídico de la situación. Ningún elemento de la respuesta dirigida por Francia a la Comisión el 12 de febrero de 1999 restó valor al análisis de la Comisión.

3. Las conversaciones, mantenidas por iniciativa de la Comisión, con los representantes de la empresa Charbonnages de France y el organismo competente (la DIGEC) y los intercambios de cartas con fecha de 5 de diciembre de 1997, 25 de marzo de 1998 y 7 de junio de 1999 no permitieron que prosperara el expediente en relación con las cuestiones planteadas.

4. Por las razones que se exponen a continuación, y con arreglo a la información de que dispone en la actualidad, la Comisión no está en condiciones de autorizar las ayudas. La Comisión considera que diversos elementos incluidos en las notificaciones de ayudas presentadas por Francia podrían constituir infracciones del Derecho comunitario.

5. La presente carta de emplazamiento se refiere a las ayudas concedidas a la industria del carbón desde 1997.

## II. Análisis financiero de las ayudas estatales a la industria del carbón

1. Las ayudas correspondientes a 1997 y 1998 notificadas por Francia con arreglo al artículo 9 de la Decisión nº 3632/93/CECA <sup>(1)</sup> (en lo sucesivo denominada "la Decisión") se asignaron como sigue:

(en millones de francos franceses)

	Ayudas a la reducción de actividad (Artículo 4)	Ayudas para cubrir las cargas heredadas del pasado (Artículo 5)	Total de las ayudas declaradas
1997 <sup>(2)</sup>	989	4 086	5 075
	(1 153)	(3 869)	(5 022)
1998	942	4 137	5 079
1999	1 000	4 135	5 135

2. En cuanto a las cantidades pagadas en concepto de apoyo a la producción, conforme al artículo 4 de la Decisión, las cifras notificadas de ayuda por tonelada equivalente carbón (tec) son las siguientes:

- 236,3 francos franceses en 1997 para 4,879 millones de tec extraídas,
- 210 francos franceses en 1998 para 4,477 millones de tec extraídas,
- 272 francos franceses en 1999 para 3,673 millones de tec extraídas.

Las pérdidas de explotación por tec ascienden respectivamente, según las notificaciones, a 510,2 francos franceses, 511 francos franceses y 645 francos franceses por tec. Según la nota de las autoridades francesas de 25 de marzo de 1998, el resto de las pérdidas se cubrió mediante préstamos emitidos por Charbonnages de France.

<sup>(1)</sup> DO L 329 de 30.12.1993, p. 12.

<sup>(2)</sup> Para el año 1997, la Comisión dispone de los datos reales, mientras que los datos correspondientes a los dos años siguientes son estimados. Las cifras entre paréntesis corresponden a los datos reales facilitados a posteriori.

3. Por consiguiente, el importe de los préstamos declarados completa las necesidades de financiación derivadas de las pérdidas de producción de Charbonnages de France. Se especifica claramente que los préstamos de marzo de 1998 se emitieron para cubrir las necesidades de financiación del año 1998 <sup>(3)</sup>.
4. De las dos notificaciones presentadas para los años 1997 y 1998 se desprende que las necesidades de financiación externa de la empresa Charbonnages de France para cubrir las pérdidas de explotación de producción y las resultantes de las cargas heredadas del pasado se atendieron mediante:
- subvenciones directas procedentes del presupuesto general del Estado,
  - dotaciones de capital con cargo a una cuenta especial del Tesoro,
  - préstamos emitidos por la empresa Charbonnages de France en los mercados financieros.

Según la información de que dispone la Comisión, el año 1999 presenta la misma estructura de financiación externa.

5. De acuerdo con la declaración de las autoridades francesas, la financiación de las pérdidas de explotación no quedaba completamente cubierta mediante las subvenciones directas y las dotaciones de capital; los préstamos emitidos por la empresa Charbonnages de France completan las ayudas declaradas.

Francia informó a la Comisión de que, en 1997 y 1998, la empresa Charbonnages de France había emitido préstamos por un importe, respectivamente, de 2 000 millones y 2 500 millones de francos franceses. En 1999, la empresa ha emitido préstamos por valor de 500 millones de euros (3 280 millones de francos franceses).

6. La estructura de financiación externa de la empresa Charbonnages de France, tal y como ha sido notificada a la Comisión, se presenta desde 1997 como sigue:

	<i>(en millones de francos franceses)</i>		
	1997	1998	1999
Subvenciones directas	2 940	2 920	2 615
Dotación de capital	<u>2 186</u>	<u>2 480</u>	<u>2 520</u>
	5 126	5 400	5 135
– Ayudas a la producción de lignito <sup>(4)</sup>	<u>– 51</u>	<u>– 321</u>	
Ayudas declaradas a la producción de carbón	5 075	5 079	5 135
Importe declarado de los préstamos	2 000	2 500	3 280
Necesidades de financiación	<u>7 075</u>	<u>7 579</u>	<u>8 415</u>

<sup>(3)</sup> Nota interna de la COB (Commission des opérations de Bourse — Comisión de las operaciones de bolsa) p. 5, § 2.4.3.

<sup>(4)</sup> Ayudas no sujetas a las obligaciones del Tratado CECA.

7. La financiación externa complementaria necesaria para cubrir las pérdidas de explotación, que resulta de calcular la diferencia entre las pérdidas de producción declaradas y las ayudas declaradas para cubrir las, asciende, según las cifras facilitadas a la Comisión:

- en 1997 a 1 336 millones de francos franceses,
- en 1998 1 339 millones de francos franceses,
- en 1999 1 369 millones de francos franceses.

8. Por lo tanto, una parte importante de los préstamos se ha destinado a cubrir pérdidas de explotación. Según la información de que dispone la Comisión, el resto de los préstamos declarados correspondería al reembolso de la deuda de préstamos en curso o llegados a su vencimiento y emitidos con anterioridad.

Por consiguiente, parece que los préstamos de la empresa Charbonnages de France se han concedido para cubrir, por una parte, las pérdidas de explotación y, por otra, el reembolso de préstamos de años precedentes que habrían servido para cubrir los déficit de explotación anteriores.

9. En su nota de 25 de marzo de 1998, Francia informó a la Comisión de las condiciones de emisión de los préstamos en el mercado internacional por la empresa Charbonnages de France. Según esta nota:

“Para hacer frente a esta demanda excepcional de financiación (es decir, para cubrir las pérdidas de explotación no cubiertas por las ayudas). . . , se obtuvieron los recursos adicionales necesarios mediante préstamos de la empresa en los mercados financieros.

Estos préstamos, autorizados cada año por el consejo de administración de Charbonnages de France, se han emitido en condiciones ordinarias sin garantía del Estado francés y han sido suscritos periódicamente por inversores institucionales nacionales y extranjeros, así como por particulares.”.

10. El déficit corriente de la empresa fue de más de 6 000 millones de francos franceses en 1997 (6 059 millones de francos franceses, es decir, 924 millones de euros). En 1998, el déficit ascendió a 5 900 millones francos franceses (900 millones de euros), a los que hay que añadir un endeudamiento de unos 35 800 millones de francos franceses acumulado en el transcurso de los ejercicios anteriores.

Hay que señalar que, si bien el Pacto del carbón (Pacte Charbonnier), celebrado entre Charbonnages de France y las organizaciones sindicales en 1994, asegura a los acreedores el mantenimiento de la actividad extractiva hasta el año 2005, no garantiza la solvencia de la empresa.

No obstante, en el mercado financiero internacional, Charbonnages de France disfruta de la calificación más elevada por lo que respecta a la garantía de su deuda a corto y medio plazo (triple A de la agencia Standard & Poor's confirmado por la agencia Moody's). Esta calificación no se otorga necesariamente a todas las empresa públicas.

La Comisión considera que esta confianza de los medios financieros internacionales sólo puede explicarse, a falta de una garantía formal, por la garantía tácita del Estado francés sobre los préstamos emitidos por la empresa. En efecto, la situación financiera de la empresa difícilmente permite pensar que haya podido emitir préstamos en condiciones ordinarias y sin "la cobertura del Estado" <sup>(5)</sup>. En marzo de 1998, la empresa Charbonnages de France emitió préstamos por 2 000 millones de francos franceses a un tipo nominal del 5 % y en 1999, por 500 millones de euros a un tipo nominal del 4,12 %.

Diversos elementos convergentes inducen a pensar que el Estado francés ha garantizado implícitamente los préstamos emitidos por la empresa Charbonnages de France a través de los estrechos vínculos que existen entre la empresa y las autoridades francesas debido, sobre todo:

- al régimen de Empresa pública industrial y comercial (Entreprise Publique Industrielle et Commerciale, EPIC) de la empresa Charbonnages de France,
- al hecho de que el Estado francés controla el 100 % del capital social de la empresa,
- a la participación del Estado francés en el consejo de administración que autoriza oficialmente las emisiones de préstamos de la empresa.

### III. Marco jurídico aplicable

Es preciso recordar lo siguiente:

- en virtud del artículo 8 del Tratado CECA, la Comisión está encargada de asegurar la consecución de los objetivos fijados en el Tratado CECA en las condiciones previstas en él,
- el Tratado CECA confía a la Comisión, en su artículo 5, la misión "de asegurar el establecimiento, el mantenimiento y la observancia de condiciones normales de competencia",
- el artículo 86 del Tratado CECA confiere a los Estados miembros la responsabilidad de asegurar el cumplimiento de las obligaciones resultantes de decisiones y recomendaciones de las instituciones de la Comunidad y de facilitar a esta última el cumplimiento de su misión.

Si se llega a la conclusión de que Francia ha incumplido su deber de vigilancia con respecto a la empresa Charbonnages de France conforme a lo establecido en la Decisión, la Comisión se reserva el derecho a adoptar las medidas correctoras que considere necesarias y, en especial, con arreglo al artículo 88 del Tratado CECA.

<sup>(5)</sup> Nota de las autoridades francesas de 25 de marzo de 1998.

### RÉGIMEN CONUNITARIO DE LAS INTERVENCIONES DE LOS ESTADOS MIEMBROS EN FAVOR DE LA INDUSTRIA DEL CARBÓN

1. El Tratado CECA [letra c) del artículo 4] establece el principio de la incompatibilidad de las subvenciones o ayudas otorgadas por los Estados con el mercado común del carbón y del acero. Con arreglo al artículo 95 del Tratado CECA, se ha establecido un régimen de excepción comunitaria de las ayudas estatales para la producción comunitaria, basado en la necesidad de reestructuración de las empresas europeas. Desde principios de los años sesenta, las transformaciones estructurales del mercado internacional y del mercado común de la energía han obligado a la industria del carbón comunitaria a realizar esfuerzos de modernización, racionalización y reestructuración. Por este motivo, muchas empresas de la Comunidad se encuentran con dificultades financieras y precisan de ayudas públicas. El mantenimiento de un régimen comunitario ha resultado indispensable debido a las importantes necesidades de financiación externa de las empresas carboneras europeas. La Decisión nº 3632/93/CECA, vigente desde el 1 de enero de 1994, define los principios que deben regular las ayudas de los Estados miembros para que se atengan a los intereses de la Comunidad, para que su amplitud y su duración se limiten a lo necesario y para que no perturben el funcionamiento del mercado común.

Conforme a esta normativa, las autoridades francesas han notificado a la Comisión todos los años las medidas financieras que preveían adoptar en favor de la industria del carbón el año siguiente. Así se ha hecho en los años 1997, 1998 y 1999.

2. Las condiciones de aplicación de la Decisión obligan a someter a la valoración de la Comisión todos los elementos útiles. Las subvenciones públicas encaminadas a compensar total o parcialmente pérdidas de explotación o cargas pueden ser compatibles con el mercado común, en la medida en que respondan a los objetivos y las disposiciones previstos en la Decisión.

Para que la Comisión pueda ejercer su poder de autorización con arreglo a un conocimiento preciso y completo de todas aquellas medidas que los gobiernos tengan la intención de tomar, conviene que los Estados miembros, y en este caso Francia, notifiquen a la Comisión todos los datos relativos a las intervenciones —excluidas las contribuciones especiales previstas en la letra c) del apartado 1 y la letra b) del apartado 2 del artículo 65 del Tratado CECA— que pretendan efectuar (o hayan efectuado) directa o indirectamente en favor de la industria del carbón comunitaria y que precisen los motivos y el alcance de las intervenciones previstas así como, en su caso, su relación con el plan de modernización, racionalización y reestructuración que hayan presentado (considerando 2 de la parte IV del preámbulo de la Decisión).

3. La Decisión que regula el régimen comunitario de intervenciones de los Estados miembros en favor de la industria del carbón prevé normas de procedimiento que permiten a la Comisión y al Estado miembro negociar los expedientes de notificación a su debido tiempo.

- a) Los Estados miembros se han comprometido a subordinar la concesión de ayudas a la autorización previa de la Comisión (considerando 4 de la parte I del preámbulo de la Decisión). El apartado 1 del artículo 9 de la Decisión obliga a los Estados miembros a notificar a la Comisión todas las medidas financieras que tengan la intención de tomar en favor de la industria del carbón tres meses antes de su entrada en vigor, es decir, a más tardar el 30 de septiembre del año precedente.

En principio, los Estados miembros sólo pueden ejecutar las ayudas previstas una vez obtenida la aprobación formal o tácita de la Comisión (apartado 4 del artículo 9 de la Decisión). Ningún pago (total o parcial) deberá realizarse con anticipación a una autorización de la Comisión (apartado 5 del artículo 9 de la Decisión). La inobservancia de las disposiciones da lugar a sanciones para el beneficiario potencial. De este modo, en caso de decisión negativa, la empresa beneficiaria deberá reembolsar íntegramente toda ayuda concedida con anticipación a una autorización de la Comisión. Además, tal pago se consideraría un anticipo de tesorería injustificado y, como tal, debería ser objeto de remuneración por parte del beneficiario a los tipos de interés del mercado, según el apartado 5 del artículo 9 de la Decisión.

- b) En los nueve meses siguientes al final del ejercicio carbonero, y a más tardar el 30 de septiembre de cada año, los Estados miembros deben notificar el importe de las ayudas efectivamente abonadas durante el ejercicio carbonero anterior, e informar de cualquier eventual regularización efectuada con respecto a las cantidades inicialmente notificadas (apartado 2 del artículo 9).

Las autoridades nacionales deben proporcionar, junto con la notificación de las ayudas para el año siguiente, los datos actualizados del ejercicio en curso.

En este caso, las notificaciones y las regularizaciones se han presentado sistemáticamente fuera de plazo. Las autoridades francesas enviaron a la Comisión la notificación de las ayudas de 1997 en junio de ese año, la correspondiente a 1998 en agosto de 1998 y la de 1999 en mayo de 1999. Por lo que respecta a la notificación de las ayudas correspondiente a 1999, la Comisión recordó a las autoridades francesas, mediante cartas de 15 de junio de 1998, 6 de julio de 1998 y 25 noviembre de 1998, los plazos concedidos.

4. El concepto de ayuda comunitaria comprende todas las medidas o intervenciones directas o indirectas de los poderes públicos relacionadas con la producción, la comercialización y el comercio exterior que, aunque no graven los presupuestos públicos, confieran a las empresas de la industria del carbón una ventaja económica, al disminuir las cargas que normalmente deberían soportar (apartado 2 del artículo 1 de la Decisión). El concepto de ayuda abarca también los elementos de ayuda que puedan comprender las medidas de financiación tomadas por los Estados miembros respecto de las empresas del carbón y que no se consideren capital a riesgo suministrado a una sociedad de acuerdo con las prác-

ticas normales de una economía de mercado (apartado 4 del artículo 1 de la Decisión).

En un principio, Francia sólo había declarado en concepto de ayudas notificadas para el año 1997 las subvenciones directas a Charbonnages de France y había anunciado la existencia de una dotación de capital.

Gracias a los intercambios de cartas mencionados se aclaró el origen y la naturaleza de esta última. La notificación para 1998 se hizo teniendo esto en cuenta e incluye una rectificación correspondiente a 1997. El incremento del capital de la empresa es un mecanismo que se utiliza anualmente en las mismas condiciones que una subvención directa: todo el importe de la dotación se atribuye a los gastos a que se hace referencia en los artículos 4 y 5 de la Decisión.

Según las declaraciones de las autoridades francesas, en 1997 y 1998 las cargas heredadas del pasado (artículo 5 de la Decisión) se financiaron completamente con una parte de la dotación de capital las subvenciones directas, mientras que las ayudas a la reducción de actividad (artículo 4 de la Decisión) se financiaron con el resto de la dotación de capital. En la notificación correspondiente a 1999 no se desglosa el origen de las sumas abonadas en concepto de ayuda.

Según la información que obra en poder de la Comisión, las ayudas a la reducción de actividad (artículo 4 de la Decisión) corresponden:

- en 1997, a una ayuda real de 236,3 francos franceses por tec extraída,
- en 1998, a una ayuda prevista de 210 francos franceses por tec extraída,
- en 1999, a una ayuda prevista de 272 francos franceses por tec extraída.

Por otra parte, las autoridades francesas declaran que las pérdidas por tec extraída ascienden a:

- 510,2 francos franceses en 1997,
- 511 francos franceses en 1998,
- 645 francos franceses en 1999.

La diferencia entre las pérdidas y las ayudas a la producción se cubre mediante préstamos, autorizados por las autoridades francesas, que la empresa Charbonnages de France emite todos los años.

5. Hay que analizar si los préstamos emitidos en los mercados financieros por la empresa Charbonnages de France, cuya única finalidad, según el análisis financiero precedente (véase la sección II), parece ser cubrir las pérdidas de explotación (artículo 4 de la Decisión) y el coste de los intereses de los préstamos precedentes, se ajustan a la definición de ayudas de la Decisión (artículo 1).



La situación financiera de Charbonnages de France no le permite emitir préstamos en el mercado financiero en condiciones ordinarias sin la garantía, al menos tácita, del Estado. La empresa Charbonnages de France prevé detener todas sus actividades de extracción en el año 2005. En esa fecha, no sólo es poco probable que haya reembolsado los préstamos actualmente en curso, sino que es posible que haya emitido otros, porque la actividad extractiva es estructuralmente deficitaria y es preciso reembolsar los préstamos precedentes. Las demás actividades de la empresa no parecen en condiciones de absorber la deuda, cuyo importe, según la información de que dispone la Comisión, podría situarse en el año 2005 entre los 60 000 y los 100 000 millones de francos franceses.

Por consiguiente, la Comisión considera que los préstamos presentan la forma de subvenciones diferidas destinadas a la reducción de actividad prevista en el Pacto carbonero <sup>(6)</sup>, lo cual no es compatible con los principios de la Decisión y, en especial, con sus artículos 1 a 9. La Comisión señala a este respecto que Francia ha calificado los préstamos, en su nota dirigida a la Comisión con fecha de 8 de abril de 1999 <sup>(7)</sup>, de "ayudas indirectas".

6. Estas ayudas no pueden autorizarse de conformidad con las disposiciones y principios del Tratado CECA y de la Decisión. Hay que recordar que el preámbulo de esta última define el marco general en el que deben situarse las ayudas estatales, en especial por lo que respecta a las normas de competencia. Por consiguiente, las ayudas estatales deben otorgarse en condiciones que permitan evaluar totalmente sus repercusiones en las condiciones de la competencia.

En el apartado 2 del artículo 2 de la Decisión se establece que, a partir del 1 de enero de 1997, únicamente podrán autorizarse las ayudas que estén consignadas en los presupuestos públicos, nacionales, regionales o locales, de los Estados miembros o que se incluyan en mecanismos estrictamente equivalentes. Se concedió a los Estados miembros un período de tres años para que se adaptaran a esta disposición. Por consiguiente, las necesidades de financiación de Charbonnages de France, con arreglo a los artículos 4 y 5 de la Decisión desde 1997, no se atienen al apartado 1 del artículo 1 de la Decisión.

- Las subvenciones directas proceden del presupuesto general del Estado y parecen, por tanto, responder a las obligaciones de la Decisión desde 1997.
- Por su parte, la dotación de capital está constituida por ingresos de privatización liberados durante el año y consignados en la cuenta de afectación especial del tesoro. En este aspecto, esta cuenta forma parte del presupuesto general del Estado. El origen específico de la dotación de

capital no parece por tanto quebrantar las obligaciones de la Decisión, sin perjuicio de las normas de contabilidad establecidas en el apartado 3 del artículo 2.

- La Comisión considera que el hecho de no consignar en el presupuesto los préstamos de la empresa correspondientes a los tres años considerados constituiría una infracción del apartado 2 del artículo 2 de la Decisión, según el cual únicamente pueden autorizarse las ayudas que estén consignadas en los presupuestos públicos o que se incluyan en mecanismos estrictamente equivalentes.

No obstante, en una carta de 7 de junio de 1999, las autoridades francesas se comprometieron a "consignar en el presupuesto del Estado las ayudas necesarias para cubrir las pérdidas de explotación de la empresa Charbonnages de France (CdF) a partir del ejercicio del año 2000".

#### IV. Conclusiones

1. A fin de preservar los derechos de defensa, la Comisión solicita a Francia que presente los argumentos pertinentes para que la Comisión pueda llegar a una conclusión sobre la compatibilidad del conjunto de las ayudas con la legislación comunitaria. La Comisión desea señalar que ningún elemento nuevo podrá aducirse posteriormente.

En consecuencia, Francia presentará, en el mes siguiente a la recepción de la presente carta, un informe sobre las ayudas estatales a la empresa Charbonnages de France desde 1997, que deberá incluir, en especial, lo siguiente:

- el desglose de las ayudas directas e indirectas en el balance de Charbonnages de France sin omitir, en su caso, las deudas fiscales y sociales con las autoridades públicas o la cobertura de determinadas cargas por el Estado,
- el importe y las condiciones de emisión de todos los préstamos emitidos desde 1997 (obligacionistas y otros),
- la afectación del importe de los préstamos de la empresa Charbonnages de France desde 1997,
- el anexo 4 del expediente de notificación de las ayudas conforme a los artículos 3 y 4 de la Decisión (formulario C: Notificaciones de los datos reales para 1998)

<sup>(6)</sup> En su Decisión 95/465/CECA, de 19 de julio de 1995 (DO L 267 de 9.11.1995, p. 46), la Comisión emitió un dictamen favorable sobre la conformidad del plan con los objetivos generales y específicos de la Decisión.

<sup>(7)</sup> Referencia: Respuesta a la carta de emplazamiento — Denuncia nº 97/4717 relativa a una presunción de desviación de las ayudas estatales por la empresa Charbonnages de France.

2. Si, tras la respuesta de Francia y las investigaciones de la Comisión, el análisis de ésta se confirma, o si la Comisión no recibe ninguna comunicación en el plazo fijado, la Comisión se reserva el derecho a enviar a Francia una decisión motivada con arreglo al artículo 88 del Tratado CECA y a imponer medidas correctoras.

Estas medidas podrían concretarse en:

- prohibición de que Charbonnages de France siga recurriendo a préstamos para cubrir los costes de explotación o los costes de los préstamos emitidos anteriormente correspondientes a la parte de éstos que haya servido para cubrir los costes de explotación,
  - la recuperación de las cantidades ilegalmente obtenidas.
3. La Comisión recuerda que, de conformidad con los apartados 4 y 5 del artículo 9 de la Decisión, todo pago realizado con anticipación a una autorización de la Comisión se considerará en cualquier caso como la concesión de una ventaja anormal en forma de un anticipo de tesorería injustificado y, como tal, deberá ser objeto de una remuneración por parte del beneficiario a los tipos de interés del mercado.
4. Además, la Comisión solicita a las autoridades francesas que informen sin demora a la empresa Charbonnages de France del presente procedimiento y de las consecuencias que se derivan de la obligación de restituir, en su caso, las ayudas percibidas indebidamente.
5. Por último, la Comisión informa a Francia de que, mediante publicación en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*,

invitará a los Estados miembros y a las demás partes interesadas de las Comunidades Europeas a que presenten las observaciones que, en su caso, deseen formular.

6. En las dos semanas siguientes a la recepción de la presente carta de emplazamiento, Francia deberá comunicar la información de carácter confidencial que considere que no debe publicarse.»

La Comisión emplaza a los demás Estados miembros y otros interesados a que le presenten sus observaciones sobre las medidas en cuestión, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente documento, en la dirección siguiente:

Comisión Europea  
Dirección General de Energía  
Dirección B  
TERV 2/19  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles/Brussel  
Fax: (32-2) 296 43 37.

*Estas observaciones se comunicarán al Gobierno francés.*

## AYUDAS ESTATALES

### **Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 (apartado 2 del antiguo artículo 93) del Tratado CE, sobre la ayuda C 13/99 (ex NN 78/98) — Alemania — Actividades de Landesentwicklungsgesellschaft mbH de Turingia en el ámbito de las instalaciones industriales**

(1999/C 280/04)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Mediante la carta que se reproduce a continuación, con fecha de 3 de marzo de 1999, la Comisión comunicó a Alemania su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 (apartado 2 del antiguo artículo 93) del Tratado CE.

#### «1. Intercambio de información hasta la fecha

Mediante escritos de 23 de abril de 1997 y 6 de octubre de 1997, la Comisión fue informada por terceros de las actividades de Landesentwicklungsgesellschaft mbH (LEG) de Turingia. Mediante escritos de 15 de mayo de 1997 y 13 de noviembre de 1997, la Comisión emplazó al Gobierno alemán para que presentara sus observaciones. La primera solicitud de información se respondió mediante escrito de 1 de julio de 1997, la segunda no obtuvo respuesta hasta el 7 de julio de 1998, tras un recordatorio de la Comisión. En una reunión bilateral celebrada el 8 de julio de 1998 en Bruselas, se indicó la urgencia del caso y el 10 de julio de 1998 la Comisión registró el recurso antes mencionado como ayuda no notificada con la referencia NN 78/98. Se intercambiaron más correspondencia para esclarecer las circunstancias del asunto: el 13 de julio

de 1997 Alemania envió material informativo y el 23 de septiembre de 1998 un escrito de contestación. El 15 de octubre de 1998 se celebró en Bruselas una reunión bilateral, a la que siguió el 12 de noviembre una inspección *in situ* de varios proyectos de LEG. El Gobierno alemán presentó sus observaciones sobre ambas cosas los días 9, 18 y 30 de diciembre de 1998.

#### 2. Landesentwicklungsgesellschaft mbH (LEG) de Turingia

*Régimen de propiedad y fines*

- 2.1. LEG fue constituida en 1992 por el Gobierno del Estado federado de Turingia como sociedad de responsabilidad limitada de duración indefinida. Los propietarios son los Estados federados de Turingia (97 %) y de Baviera (3 %).

- 2.2. Según la escritura de constitución de sociedad, LEG coopera de cualquier forma con las tareas y medidas en interés del Estado federado de Turingia y el desarrollo infraestructural y económico, en particular en el sector de la construcción, sobre todo en los ámbitos siguientes:

- industria,
- viviendas y urbanismo,
- construcción general,
- agricultura,
- protección del medio ambiente,
- transporte en ámbitos no oficiales.

2.3. LEG se ocupa de la adquisición, administración, financiación, intermediación, enajenación y saneamiento de inmuebles, así como de la urbanización, reordenación y edificación de terrenos. Por otra parte, la sociedad puede adquirir y ceder derechos de edificación, así como adquirir, erigir, explotar, administrar, actuar de intermediaria y enajenar edificios, instalaciones y establecimientos de todo tipo, tanto en nombre propio como ajeno, por cuenta propia o ajena. Está obligada a mantener, cuidar y modernizar el correspondiente activo inmovilizado.

#### Actividades de LEG

2.4. Las informaciones de que dispone la Comisión sugieren, sin perjuicio de un examen con arreglo al artículo 92 del Tratado CE, una distinción entre los ámbitos de actividad siguientes:

- inmuebles para instalaciones industriales,
- inmuebles para viviendas,
- infraestructura industrial <sup>(1)</sup>,
- protección general de riesgos <sup>(2)</sup> y eliminación de daños ambientales <sup>(3)</sup>,

<sup>(1)</sup> En relación con la infraestructura industrial (abastecimiento energético, enlaces de transportes, etc.) hay que indicar que los complejos industriales de la antigua República Democrática Alemana (RDA) eran competentes tanto para la infraestructura general (por ejemplo, jardines de infancia) como para la infraestructura industrial (por ejemplo, producción de energía, calefacción a distancia e infraestructura de transportes). En Turingia, parece que esta infraestructura, tras la privatización de los diferentes sectores productivos de los complejos industriales, fue parcialmente adquirida por LEG, para modernizarla y adaptarla a las necesidades de las empresas recientemente establecidas. Parece que en otros casos, LEG recibió el encargo del Estado federado o de los municipios de llevar a cabo estos trabajos. Los costes son soportados por el *Land* de Turingia o los municipios correspondientes, y normalmente son cofinanciados en el marco del régimen de ayudas autorizado "régimen conjunto".

<sup>(2)</sup> Parece que la tarea de proteger a la población y a las regiones industriales de los riesgos generales (inundación, residuos peligrosos, etc.) fue conferida por los municipios a LEG. Las actividades correspondientes parecen ser financiadas hasta un determinado grado en el marco de determinadas medidas autorizadas por la Ley alemana de promoción del empleo (artículo 249 h AFG).

<sup>(3)</sup> Por lo que se refiere al saneamiento de terrenos industriales contaminados hay que señalar que el Treuhandanstalt/BVS se había comprometido inicialmente, mediante un primer contrato de privatización con la empresa en quiebra en cuestión, a asumir los costes del saneamiento de los terrenos contaminados ("liberación de los daños ecológicos anteriores"). Aquí hay que determinar si este compromiso se transmite automáticamente al siguiente comprador (en particular, a LEG).

- presentación de la economía turingia al público <sup>(4)</sup>,

### 3. **Ámbito de aplicación material de la presente resolución**

3.1. Dado el amplio espectro de las actividades de LEG, su complejidad y las declaraciones contradictorias de las autoridades alemanas, la presente resolución se refiere exclusivamente a las ayudas que el Estado federado de Turingia haya podido conceder o considere conceder a través de LEG (en el sector de instalaciones industriales).

3.2. La Comisión examina *infra* si también en los demás ámbitos de actividad de LEG antes mencionados existen elementos de ayuda. En particular, se reserva el derecho de incoar un procedimiento con arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE en los ámbitos no cubiertos por esta resolución. La Comisión tampoco excluye la posibilidad de que LEG actúe en determinados ámbitos como una sociedad mercantil privada y que haya recibido o todavía cuente con ayudas ilegales para estas actividades.

3.3. De momento, la Comisión no dispone de suficiente información sobre si LEG ha cumplido otras disposiciones aplicables del Derecho comunitario. En este contexto hay que esclarecer, en particular, si determinadas actividades de LEG son compatibles con las disposiciones comunitarias sobre contratos públicos.

### 4. **Actividades de LEG en el ámbito de las instalaciones industriales**

4.1. La Comisión dispone de diversas informaciones detalladas sobre las actividades de LEG en el ámbito de las instalaciones industriales. Según ellas, parece que LEG siempre participa, a instancias del Gobierno del Estado federado de Turingia, cuando el procedimiento de ejecución concursal de una empresa de importancia local o regional en dificultades es inminente o ya está en curso (normalmente tras el fracaso de un primer intento de privatización). Entonces la tarea de LEG consiste en lograr una solución para su salvamento ("Auffanglösung"). Con este objetivo, LEG adquiere de la masa concursal los establecimientos correspondientes, equipamientos incluidos. Después se moderniza la instalación (derribo y nueva construcción y/o renovación del edificio y, en su caso, modernización de las instalaciones técnicas), mientras que, paralelamente, sobre la base de un arrendamiento a corto plazo, las actividades de la empresa en procedimiento de ejecución concursal (sin sus deudas) son proseguidas por una "sociedad de continuación" de nueva creación, con frecuencia adquirida por la dirección de la empresa ("management-buy-out") o en condiciones similares (sin participación de LEG). No se sabe si estos contratos de arrendamiento se celebran en condiciones normales de mercado.

<sup>(4)</sup> Según el escrito del Gobierno alemán, de 7 de julio de 1998, LEG representa a Turingia como lugar de inversión a nivel nacional e internacional.

4.2. Tras la modernización, la instalación se vende o se arrienda, en todo o en partes. Con este fin, los bienes se ofrecen al público mediante anuncios de periódico u otros, aunque no está claro que siempre se proceda así (por ejemplo, en caso de una "Auffanglösung") En algunos de los anuncios de periódico remitidos por las autoridades alemanas se señala expresamente que LEG no está obligada a perfeccionar la transacción, ni tampoco a adjudicar el contrato al mejor postor. Por otra parte, en una reunión con la Comisión, el 15 de octubre de 1998, LEG confirmó que examinaba las ofertas en función de la adecuación de los proyectos presentados a la estructura industrial y a la infraestructura industrial local, los efectos sobre el mercado de trabajo y las rentas y las perspectivas a largo plazo. La Comisión considera que estas manifestaciones y los mencionados anuncios de periódico contradicen las explicaciones escritas del Gobierno alemán de 9 de diciembre de 1998, según las cuales LEG efectúa sus ventas en condiciones normales de mercado y con arreglo a los criterios recogidos en la Comunicación de la Comisión relativa a los elementos de ayuda en las ventas de terrenos y construcciones por parte de los poderes públicos DO C 209 de 10.7.1997, p. 3)

4.3. LEG parece haber recibido ayuda financiera *ad hoc* para determinados proyectos y/o recursos de una línea presupuestaria especial del presupuesto del Estado federado de Turingia (para todo o parte del proyecto). En la actualidad, la Comisión no puede determinar en qué medida estos recursos fueron utilizados en el ámbito de las instalaciones industriales.

4.4. En el período comprendido entre 1994 y mediados de 1998 LEG recibió de esta línea presupuestaria especial recursos financieros por un valor total de 391 millones de marcos alemanes. Además se concedieron a LEG considerables ayudas financieras en el marco de regímenes de ayuda autorizados, también cofinanciados por el FEDER, para algunas de sus actividades.

4.5. LEG opera en la actualidad en unos 50 municipios. Los tres mayores proyectos se encuentran en Schwarzza (156,4 millones de marcos alemanes para el período 1994-1997). Unterwellenborn (33,2 millones de marcos alemanes para el período 1994-1997, aún en curso) y Hermsdorf (28 millones de marcos alemanes para el período 1994-1997).

4.6. Entre los clientes de LEG se cuentan también empresas que no responden a la definición comunitaria de pequeñas y medianas empresas (PYME) (DO. C 213 de 23.7.1996, p. 4) o que actúan en sectores sensibles, es decir, en ámbitos regidos por normas sectoriales comunitarias.

## 5. **Apreciación**

### *Existencia de una ayuda estatal*

5.1. LEG pertenece en un 97 % al Estado federado de Turingia y se financia con recursos públicos. Por tanto, sus actividades deben examinarse con arreglo a los artículos 92 y siguientes del Tratado CE.

5.2. En su Comunicación de la Comisión relativa a los elementos de ayuda en las ventas de terrenos y construcciones por parte de los poderes públicos (DO C 209 de 10.7.1997, p. 3), la Comisión fijó las Directrices para la venta de terrenos y construcciones públicas, según las cuales puede verificarse si hay una ayuda en favor del comprador. Estas Directrices (que corresponden a la práctica anterior de la Comisión), que se proponen excluir la concesión de ayudas estatales, son también aplicables cuando una entidad pública conceda un derecho de uso de terrenos o inmuebles. Según ellas, sólo una licitación incondicional o un peritaje independiente puede garantizar el respeto de las condiciones de mercado y descartar la existencia de una ayuda estatal.

5.3. Es evidente que en algunas actividades de LEG estas condiciones no se cumplen: se desprende de las escasas informaciones disponibles que algunas empresas pueden haber obtenido condiciones más favorables que las del mercado, ya sea directa o indirectamente. Pero no se han presentado pruebas que permitan determinar la intensidad de la ayuda o los gastos subvencionables. Hasta la fecha Alemania no ha comunicado reglas precisas de carácter general a que se haya atendido LEG a la hora de vender o arrendar.

5.4. Las ventajas procedentes de recursos públicos concedidas o transmitidas, entre otros, a compradores y arrendatarios por LEG, se consideran ayudas estatales con arreglo al apartado 1 del artículo 92 del Tratado CE. Estas ventajas permiten a los beneficiarios reducir los costes corrientes o los costes de inversión. Por otra parte, las actividades de LEG generalmente se dirigen a empresas de relevancia local o regional en sectores industriales de importancia mundial, como, por ejemplo, acero, material óptico y electrónico, productos químicos y farmacéuticos y porcelana. Ello evidencia que el comercio intracomunitario se ve afectado.

### *Compatibilidad de las ayudas con el mercado común*

5.5. En el presente caso no son aplicables las letras a) y b) del apartado 2 del artículo 92. También hay que señalar que el Gobierno alemán en ningún momento ha alegado la letra c) del apartado 2 del artículo 92, y la Comisión considera que dicho artículo no es aplicable al caso.

5.6. Como Turingia es una región comprendida en la letra a) del apartado 3 del artículo 92 del Tratado CE, toda ayuda concedida debe examinarse con arreglo a dicho artículo y a las Directrices sobre las ayudas estatales de finalidad regional. Según estas Directrices, las ayudas para inversiones iniciales no pueden rebasar determinados toques, ni siquiera mediante acumulación. Para la Comisión es evidente que toda ayuda en forma de venta de terrenos en condiciones favorables (que puede considerarse como inversión inicial) es acumulable con otras ayudas, pudiendo sobrepasar el tope de las ayudas regionales y de acumulación de ayudas y es posible concederla a empresas en sectores sensibles. Por otra parte, la Comisión no dispone

de los elementos necesarios para determinar la compatibilidad de estas ayudas con el mercado común en todos los casos en que se concedieron ayudas de funcionamiento; de hecho, la Comisión, desde hace tiempo, sólo autoriza estas ayudas en casos excepcionales en regiones de la letra a) del apartado 3 del artículo 92, del Tratado CE cuando se reúnen determinadas condiciones mínimas, como período limitado, intensidad regresiva de la ayuda o exclusión de sectores sensibles. En el presente caso, nada indica que estas condiciones se reúnan.

- 5.7. No hay que excluir que las actividades de LEG se refieran también a empresas en dificultades. En unos pocos casos importantes LEG concedió a los arrendatarios aplazamientos de pago y préstamos. Hay que esclarecer si este procedimiento puede equipararse al comportamiento de un operador privado del mercado que acepta retrasos en el pago porque los costes del cambio de arrendatarios son extremadamente elevados. Por otro lado, no existen signos de que las ayudas estén en consonancia con la política de la Comisión relativa a las empresas en dificultades. A este respecto, hay que determinar si el apoyo financiero se concede en forma de garantías o préstamos a tipos de interés habituales en el mercado y si se limita a la cantidad necesaria para que la empresa prosiga su actividad. Además, las ayudas de salvamento sólo deben pagarse cuando sean verdaderamente necesarias y se basen en un plan de saneamiento factible.
- 5.8. Dado que el Gobierno alemán no ha procedido con la transparencia necesaria y sólo ha transmitido informaciones fragmentarias y contradictorias, la Comisión no está en situación de apreciar la compatibilidad de las actividades de LEG en el ámbito de las instalaciones industriales con el mercado común, por lo que alberga dudas al respecto.

Por consiguiente, la Comisión requiere a Alemania que, con arreglo al apartado 2 del artículo 93 del Tratado CE, presente sus observaciones en el plazo de un mes a partir de la recepción del presente escrito y aporte todas las informaciones oportunas para apreciar las ayudas y medidas.

La Comisión solicita a Alemania, en particular, que, a la luz de la sentencia del Tribunal de Justicia de 13 de abril de 1994 en los asuntos acumulados C-324/90 y C-342/90 (República Federal de Alemania y Pleuger Worthington GmbH GmbH contra Comisión de las Comunidades Europeas), declare si las actividades de LEG deben considerarse una sucesión de ayudas individuales o un régimen de ayudas.

La Comisión solicita nuevamente los datos y documentos ya pedidos en la carta de 15 de diciembre de 1998: informaciones sobre todos los casos en que no se realizó

ninguna licitación abierta incondicional ni ningún peritaje independiente; o que los terrenos o inmuebles no se vendieron tras el procedimiento de licitación al mejor postor; o que una empresa operaba en un sector sensible; o que una empresa no se ajustaba a la definición comunitaria de PYME; así como el informe del Tribunal de Cuentas del Estado federado de Turingia sobre las actividades de LEG.

La Comisión solicita a Alemania que enumere en una lista todos los casos en que se hayan concedido ayudas de funcionamiento y todos los datos necesarios sobre las condiciones en que se concedieron las ayudas, así como todos los casos en que se concedieron ayudas a empresas en crisis y todos los datos necesarios sobre las condiciones en que concedieron las ayudas.

La Comisión solicita a sus autoridades que transmitan sin demora una copia del presente escrito a los eventuales beneficiarios de las ayudas.

La Comisión recuerda a Alemania el efecto suspensivo del artículo 93 del Tratado CE y su carta a los Estados miembros de 22 de febrero de 1995, según la cual puede solicitarse al destinatario la devolución de toda ayuda ilegalmente concedida. La devolución se efectuará de acuerdo con las disposiciones nacionales e incluirá los intereses calculados sobre la base del tipo de referencia utilizado para calcular el equivalente neto de subvención de las ayudas regionales a contar desde el día del pago de la ayuda y hasta su devolución efectiva.

La Comisión comunica a Alemania que informará a los demás interesados mediante publicación del presente escrito en el *Diario Oficial de las Comunidades Europeas*. Además, pondrá el procedimiento en conocimiento de los terceros interesados en los países signatarios del Acuerdo EEE mediante una comunicación en el anexo EEE del Diario Oficial y al Órgano de Vigilancia de la AELC mediante envío de una copia del presente escrito. Se ruega a todos los interesados antes mencionados que manifiesten su postura en el plazo de un mes a partir de la fecha de la presente publicación.».

Por la presente, la Comisión invita a los interesados a que le presenten sus observaciones sobre la ayuda/medida en cuestión en un plazo de un mes a partir de la fecha de la presente publicación, enviándolas a la dirección siguiente:

Comisión Europea  
Dirección General IV  
Dirección G.3  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles/Brussel  
Fax (32-2) 296 98 15.

*Dichas observaciones serán comunicadas a Alemania.*

## AYUDAS ESTATALES

**Invitación a presentar observaciones en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre la ayuda C 44/99 [ex NN 23/99 (ex N 678/98) — Medida complementaria para las ovejas (1998), y ex NN 79/99 (ex N 90/99) — Régimen de ayudas para las pérdidas de forraje de invierno (febrero de 1999)]**

(1999/C 280/05)

Por carta de julio de 1999, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Irlanda su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea  
Dirección General de Agricultura  
Dirección de legislaciones económicas agrarias  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles/Brussel  
Fax (32-2) 296 21 51

Dichas observaciones serán comunicadas a Irlanda. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

Las medidas con respecto a las cuales la Comisión ha decidido incoar el procedimiento forman parte de una serie de medidas relacionadas con las pérdidas en el suministro de forraje de invierno, debido a la persistencia de condiciones climáticas adversas en 1998 y 1999. Todos los detalles relativos al tema y las razones por las cuales la Comisión ha decidido no presentar objeciones a ciertas medidas pueden encontrarse en el texto íntegro de la carta al Estado miembro que se reproduce a continuación.

**NN 23/99 (ex N 678/98) — Medida complementaria para las ovejas (diciembre de 1998)**

La decisión de incoar el procedimiento se refiere únicamente a la segunda submedida (prima por oveja) de la medida complementaria para las ovejas, que consiste en facilitar instalaciones para el sacrificio de unas 100 000 ovejas de reforma de montaña de los pastos comunales de montaña en seis condados occidentales irlandeses afectados por las malas condiciones climatológicas y la mala calidad de los tipos de suelo. Los gastos totales del régimen ascendieron aproximadamente a 1 millón de libras irlandesas (1,27 millones de euros), aunque sólo se concedió la ayuda para la eliminación de las ovejas durante los meses de noviembre y diciembre de 1998. El Ministerio de Agricultura y Alimentación efectuó una serie de pagos a los mataderos de ovejas que prestaban sus instalaciones en el caso de las dos categorías de ovejas cuyo valor comercial no alcanzaba a cubrir los gastos de sacrificio y manipulación.

El pago es de 10 libras irlandesas (12,7 euros) para los animales destinados al sacrificio que no tenían ningún valor comercial. Un 66 % de los animales de reforma fueron designados y enviados al centro de extracción de grasas. En el caso de los animales designados, la fábrica no efectuó ningún pago al productor. Se efectuó un pago de 3 libras irlandesas por animal en el caso de las ovejas aptas para el deshuesado (*boner ewes*), lo que supuso un beneficio muy limitado a los ganaderos, en términos de carne recogida. Según la información proporci-

nada por las autoridades irlandesas, la ayuda de 3 libras irlandesas (3,81 euros) por animal ha permitido a los mataderos sacrificar 35 300 ovejas aptas para el deshuesado. Los productores y los responsables de los mataderos negociaron entre sí el pago por esos animales, que, según las autoridades irlandesas, fue meramente simbólico. La carne de los animales comprada por las plantas de procesamiento de carne, con arreglo a este acuerdo, se destinó al consumo humano.

La comisión considera que la medida en cuestión constituye claramente una ayuda a los productores de ovinos con arreglo al apartado 1 del artículo 87 del Tratado.

La Comisión tiene sus dudas de que pueda aplicarse en el presente caso la letra b) del apartado 2 del artículo 87, en virtud de la cual los Estados miembros pueden conceder ayudas para compensar los daños causados por acontecimientos de carácter excepcional. En realidad, la medida parece haberse concebido para contrarrestar la crisis económica del sector y por lo tanto, no puede considerarse que constituya una compensación por los daños causados por acontecimientos de carácter excepcional.

En lo que respecta a la letra c) del apartado 3 del Tratado, la Comisión duda de que pueda considerarse que la prima por oveja favorezca el desarrollo del sector, puesto que no es probable que traiga consigo mejoras estructurales en las explotaciones de los beneficiarios. Además, al permitir que la carne obtenida de las *boner ewes* sea vendida para el consumo humano y entre así en competencia en el mercado con otras carnes, cuyos costes de sacrificio no han sido reducidos, parece que las autoridades irlandesas no consiguen minimizar los efectos de la medida en lo que respecta a la competencia.

Uno de los argumentos esgrimidos es que la medida era necesaria debido a motivos relacionados con el bienestar animal. Sin embargo, la información recibida hasta el momento no demuestra la existencia de un problema de bienestar animal tan grave e inmediato como para justificar el sacrificio de un número tan grande de animales en un período tan corto de tiempo. Lo cierto es que parece que el principal problema al que aluden las autoridades irlandesas, la desnutrición, podría solucionarse mediante el suministro de piensos adecuados a los animales.

Para justificar la ayuda, las autoridades irlandesas también citan consideraciones medioambientales y en concreto, se refieren al daño que los animales podrían causar en los pastos ya anegados. Sin embargo, aún así parece que el problema podría solucionarse igualmente mediante el suministro de piensos procedentes de fuentes alternativas.

Del mismo modo, las autoridades irlandesas se refieren a los costes adicionales que supone la normativa de seguridad nacional aplicable a la eliminación de materiales especificados de riesgo (SRM) para las empresas de transformación. En esta fase del procedimiento, la Comisión no desea excluir del todo la posibilidad de que el pago de una ayuda temporal y decreciente, que permita a los productores de ganado y a los mataderos superar una pérdida de competitividad en el mercado internacional, dándoles tiempo para adaptarse a los costes adicionales que suponen dichas normas, pueda considerarse que favorezca el desarrollo del sector en conjunto y por ello pueda beneficiarse de una exención en virtud de la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado. Con todo, en el caso que nos ocupa, la Comisión señala que la ayuda se está concediendo de manera selectiva, dirigiéndose a un número limitado de animales y a una zona geográfica restringida, con el objetivo concreto de contrarrestar las condiciones adversas del mercado ya expuestas, que hacen que para los mataderos no sea rentable transformar los animales en cuestión.

Más aún, la Comisión expresa sus dudas en lo que concierne a la compatibilidad de la medida con la organización común de mercados para el sector de la carne de ovino. La medida irlandesa puede constituir un mecanismo de intervención alternativo que es posible que interfiera con el sistema previsto en la organización común de mercados. Si se confirman estas suspensiones, a la Comisión no le quedará más alternativa que declarar que la ayuda es incompatible con el Tratado.

#### **NN 79/99 (ex N 90/99) — Régimen de ayudas para las pérdidas del forraje de invierno (febrero de 1999)**

Esta ayuda prevee tres submedidas dirigidas a diferentes grupos de beneficiarios. El presupuesto para la primera y la segunda medida asciende, en total, a 25,4 millones de euros.

La primera submedida amplía la ayuda concedida en virtud de la medida N 605/98 a nuevos beneficiarios que no recibieron

subvenciones por no encontrarse en las zonas desfavorecidas identificadas como las más afectadas.

Los pagos establecidos a los ganaderos que poseen ovejas de montaña es de 5,08 euros por oveja o borrego hasta un total de 75 cabezas de ganado para los ganaderos que poseen vacas nodrizas es de 50,79 euros (40 libras irlandesas) por vaca nodriza hasta un máximo de 380 euros (300 libras irlandesas) equivalente a 7,5 vacas, y para los productores de leche a pequeña escala (con una cuota inferior a 35 000 galones) es de 38,01 euros por cada 1 000 galones de leche, hasta un máximo de 10 000 galones.

A partir de la información remitida por las autoridades irlandesas, la Comisión no puede excluir la posibilidad de que la ayuda se conceda igualmente a los agricultores que siguen métodos intensivos de producción que incluyen la compra de forraje de invierno a fuentes externas. En esos casos, no se puede descartar la posibilidad de que se esté dando un exceso de compensación.

Como reconocimiento del hecho de que los agricultores que ya han recibido subvenciones, en virtud de la ayuda N605/98, se encuentran en las zonas más afectadas, de acuerdo con la segunda submedida se les pagará en breve una ayuda complementaria del 50 % lo que elevará el porcentaje total de compensación hasta cerca del 50 %. Pese a todo, la Comisión considera que las autoridades irlandesas no han remitido información que pruebe que el nivel medio de pérdidas de forraje de invierno de los productores en cuestión alcance un 50 % o más. De hecho, en el informe Teagasc (enero de 1999), se habla de unas pérdidas de entre un 20 y un 50 %.

Finalmente, se creará un Fondo especial de ayuda para el forraje de invierno (SFHF) dirigido a un pequeño número de agricultores que no cumplieron los requisitos necesarios para acceder a las ayudas en 1998 y que tampoco cumplen los previstos en la primera submedida (véase más arriba) del presente régimen. El objetivo es conceder subvenciones a los pequeños agricultores que dependen casi totalmente de una empresa agraria relativamente pequeña como única fuente de ingresos. La asignación presupuestaria asciende a 635 000 euros. Pese a todo, no hay indicios que prueben que las ayudas previstas en la medida estuvieran condicionadas o fueran proporcionales a las pérdidas del forraje invernal provocadas por el exceso de lluvias.

Por el contrario, parece que las ayudas se destinan a cualquier ganadero que pruebe que su ganado sufre, o que es probable que sufra, de desnutrición debido a la escasez de forraje, independientemente de cuál sea la causa de dicha escasez. Por esta razón, la Comisión estima que esta medida puede constituir una ayuda de funcionamiento que sería incompatible con el mercado común.

The Commission wishes to inform Ireland that, having examined the information supplied by your authorities on the aid measures referred to above, it has decided to initiate the procedure laid down in Article 88(2) of the Treaty in respect of the ewe premium introduced with the ewe supplementary measure (NN 23/99) and in respect of the scheme of assistance for winter fodder losses (NN 79/99). As regards the measure providing for compensation for the loss of winter fodder to hill sheep farmers (part of the ewe supplementary measure) the Commission does not raise objections as this measure is considered to be compatible with the Treaty.

In taking this decision the Commission has relied on the following considerations:

#### PROCEDURE

- (1) The two aid schemes represent further measures relating to losses in winter fodder supply of Irish livestock producers due to persistent bad weather during 1998 and 1999. The Irish authorities state that further aid became necessary because of continuous wet weather conditions, high stock level on farms, earlier winter feedings because of such ground conditions and poor silage quality.
- (2) The Commission has by letter of 8 December 1998 already authorised one aid scheme to compensate Irish livestock producers for fodder losses caused by adverse weather conditions (N 605/98).
- (3) This authorised scheme was directed at sheep farmers with mountain grazings, suckler cow producers and small dairy farmers (with milk quotas of less than 35 000 gallons) in 753 district electoral divisions (DEDs) situated in areas which were identified as worst affected in a Teagasc survey of September 1998. These areas also have the status of less-favoured areas within the meaning of Directive 75/268/EEC.
- (4) The payment rates were set for Sheep Farmers with Mountain Ewes at EUR 5,08 per ewe or hogget up to 75 head, for Suckler Cow Farmers at EUR 50,79 (IEP 40) per suckler cow up to a ceiling of EUR 380 (IEP 300) equivalent to 7,5 cows and for small scale dairy farmers (< 35 000 gallons milk quota) at EUR 38,00 per 1 000 gallons milk up to 10 000 gallons.
- (5) According to the letter from the Irish authorities of 11 February 1999, total expenditure under the authorised scheme amounted to EUR 15,4 million (IEP 12,128 million). This was made up of payments to 43 969 suckler cow and hill sheep farmers amounting to a total of EUR 13,758 million and payments to 6 851 dairy farmers of a total of EUR 1,643 million. However, of these dairy farmers, 1 387 of did not receive any further payment, as they had reached the EUR 380 ceiling for suckler cow payments.
- (6) The present decision concerns two further aid measures which are intended to alleviate the difficulties of Irish livestock farmers:
- (7) A notification of an aid measure (ewe supplementary measure) according to Article 88(3) of the Treaty was forwarded by Ireland on 2 December 1998 in reply to a letter from the Commission of 26 November 1998 asking

for information about a scheme, of which the Commission had learned through information in the public domain. The aid was registered under the State aid number N 678/98.

- (8) By letters of 12 February 1999 and 14 April 1999 the Irish authorities submitted additional information. In their letter of 12 February 1999 they confirmed that the measure had been put into effect before the Commission had submitted its comments according to Article 88(3) of the Treaty. The aid was consequently transferred to the register of non-notified aids as NN 23/99.
- (9) By letter of 11 February 1999, registered on 18 February 1999 the Irish authorities notified a further aid scheme under the title assistance for winter fodder losses (February 1999) according to Article 88(3) of the Treaty. Additional information was submitted by letter of 29 April 1999, registered on 3 May 1999. In the letter the Irish authorities confirmed that the aid had been put into effect. The aid was consequently transferred to the register of non-notified aids as NN 79/99.
- (10) The Commission takes note of the Irish authorities' explanation that "there was an imperative for immediate intervention and the Department of Agriculture and Food recognised that any delay would have led to serious animal welfare problems and health risks should widespread animal deaths from starvation occur, an inevitability in the circumstances."
- (11) Nevertheless, the Commission regrets that Ireland by putting the schemes into force without granting sufficient time for the Commission to submit its comments concerning the projects acted in violation of its obligations under Article 88(3) of the Treaty. In this context it has to be recalled that according to the jurisprudence of the European Court of Justice the procedural rules laid down in Article 88(3) of the Treaty have direct effect<sup>(1)</sup> and the procedurally illegal nature of an aid cannot be redressed after the event.

#### DESCRIPTION AND ASSESSMENT

- (12) Since both of the measures provide relief in respect of the same winter fodder problem and to a certain extent will apply in respect of the same beneficiaries the Commission has considered it appropriate to examine the measures in one.
- (13) Since the measure applies in the sector of livestock production, as a matter of preliminary observation it has to be noted that the applicability of the State aid rules of the Treaty results from the relevant provisions of the common organisations of the market for sheep and the production of sheepmeat<sup>(2)</sup> and for beef<sup>(3)</sup> respectively, wherein is stipulated that Articles 87, 88 and 89 of the Treaty apply to the products covered by the Regulations.

<sup>(1)</sup> Judgement of the European Court of Justice of 21 November 1991 in Case C-354/90, FIOM, [1991] ECR, p. I-5505.

<sup>(2)</sup> Article 22 of Council Regulation (EC) No 2467/98 on the common organisation of the market in sheepmeat and goatmeat (OJ L 312, 20.11.1998, p. 1).

<sup>(3)</sup> Article 24 of Council Regulation (EEC) No 805/68 of 27 June 1968 on the common organisation of the market in beef and veal (OJ L 148, 28.6.1968, p. 24).



## I. NN 23/99 — EWE SUPPLEMENTARY MEASURE

- (14) The notified aid consists of two distinct measures in the sheepmeat sector, the additional winter fodder aid and the ewe premium, which are assessed separately in the subsequent sections I.(a) and I.(b).

**I.(a) Additional winter fodder aid**

- (15) The measure provides aid for farmers who had to purchase additional animal feed in the winter of 1998/1999 because of exceptionally bad weather conditions which did not allow them to leave their animals outside for grazing. Payments will be granted per ewe for hill sheep farmers depending largely on commonage grazing in the six western counties. There are 5 300 sheep producers belonging to this group.
- (16) Sheep producers who depend largely on commonage grazing are among the worst affected by the fodder crisis, as the counties concerned are located in the part of Ireland with the highest rainfall. During the 1998 growing season, severe wet weather and below average sunshine resulted in difficulties in saving adequate winter feed for animals. The situation is acute particularly on peaty or heavy clay soils, and conditions were so poor that a large proportion of winter fodder could not be harvested due to ground conditions. Through October, November and December, weather conditions continued to be very unfavourable, with rainfall between 125 % and 145 % of normal in the West of Ireland. The saturated grazing land in these hill sheep farms was unable to meet feed demand, the need for supplementary fodder increased and at the same time the shortage in fodder supply proved to be acute. Despite the efforts of the Irish authorities to provide help to those most in need, there have been distressing accounts of cattle and sheep deaths from starvation during January and February of this year.
- (17) The number of sheep with reference to which the payments are made correspond to not more than 70 % of the 1998 quota number of ewes. The payment per ewe is set at IEP 10 (EUR 12,7). The cost of this additional support will be IEP 5 million (EUR 6,349 million).

*Article (87)(1) of the Treaty*

- (18) The payments in question manifestly fulfil the terms of Article 87(1) of the Treaty which lays down a general prohibition to grant State aids subject to exception provisions in paragraphs 2 and 3.

*Article (87)(2)(b) of the Treaty*

- (19) Under Article 87(2)(b) of the Treaty it is constant Commission practice (see Working Document VI/5934/86 <sup>(4)</sup>) to allow aids to be granted to compensate for adverse weather conditions such as heavy rain provided that the resulting losses reach a certain minimum intensity, normally 30 %, reduced to 20 % in the case of the less-favoured areas, in comparison with an average year (calculated on the basis of average production in the three years preceding the year in

which the damage took place). The aid should not exceed the amount of the loss of the individual producer.

- (20) The scheme authorised by Commission letter of 25 November 1998 as N 605/98 was open to various groups of beneficiaries one of which being hill sheep farmers also targeted by the present measure <sup>(5)</sup>. Pursuant to N 605/98 beneficiaries have received winter fodder aid of IEP 4 per ewe on numbers up to 75. This scheme, however, proved to be insufficient since the farmers' fodder situation deteriorated further on account of persistent bad weather. In fact, due to the exceptional weather situation, the Irish authorities in the meantime had to further complement their support by introducing a third scheme (see section II of this letter) which again partly targets the same farmers who have already received aid under the previous schemes.
- (21) The Commission accepts that farmers who largely depend on commonage grazing and in normal years either leave their animals outside permanently or only incur little cost for bought-in fodder when sheep are brought in for a short time sustained economic damage on account of the exceptionally bad weather conditions similar to farmers who suffer losses in the winter fodder they save. In terms of Commission policy on compensation for production losses suffered from adverse weather conditions the factual impossibility to provide fodder for the sheep by grazing can therefore be assimilated to a loss of fodder production.
- (22) As the Irish authorities have confirmed that during the last winter the feeding available from grazing was virtually nil (which must be considered to constitute a loss of 100 %) the losses for the farmers exceed the relevant mark of 20 %. From this follows the applicability of Article 87(2)(b) of the Treaty.
- (23) The Irish authorities have attached to their letter of 14 April 1999 an annex which sets out the feeding requirements for hill sheep in normal winters compared with the winter of 1998/1999. Since weather conditions severely affected grass availability, hill sheep farmers during the last winter had to provide twice the quantity of feeding for twice the period of time which resulted in extra-costs of approximately IEP 23 (EUR 29,20) per ewe (actual feeding costs of IEP 28 in comparison to normal costs of about IEP 4,7 <sup>(6)</sup>). As the combined premium of the present scheme in combination with the first winter fodder aid (N 605/98) amounts to IEP 14 per ewe there is in principle no risk of over compensation at the level of the individual beneficiary.

<sup>(5)</sup> Mountain sheep farmers, suckler cow farmers and small-scale dairy farmers located in Leitrim, Cavan west, Roscommon north, Mayo, along the rivers Shannon and Suck, including Shannon Callows, Clare (all areas), especially north and west Clare, Longford North, all of Donegal except east Donegal, Kerry (south and east of Killarney), Galway (wetland areas and Connemara), Sligo (west and south), Cork (West Duhallow and Skibbereen/Bantry areas) and certain other mountain areas.

<sup>(6)</sup> In the case of mountain sheep production normally lambing occurs late (April, May, June) and in many cases sheep survive on the hillside or upland pastures without housing. In consequence, in the case of this production system, feed expenditure ranges from none at all to some supplementary expenditure for feeding in February and March prior to lambing amounting to an average expenditure on feed of about IEP 4,7 per ewe (30 kgs forage and 10 kgs concentrate

<sup>(4)</sup> Working Document No VI/5934/86 of 10 November 1986 regarding eligibility of damage for compensation in cases of adverse weather conditions respectively epizootic and plant diseases.

- (24) However, the Commission has noted that the means by which the level of compensation is calculated is not directly based on the farmers' fodder losses. Instead, compensation is calculated by reference to the quota for sheep under the common market organisation. According to the Irish authorities this is done in order to keep the costs of administrating the scheme in proportion to its objective. The possibility of impreciseness in the calculation of compensation seems to be further accentuated by the fact that the second part of the measure (see section I.(b) below) implemented in December 1998 provides for the de-stocking of herds by 30 %.
- (25) The Irish authorities have assured that as the number of sheep with reference to which the payments are made is set at not more than 70 % of the 1998 quota number of ewes (see paragraph 17 above) the aid is granted in accordance with, at least, the minimum number of sheep remaining in the flocks. Under European Union Regulations governing the use of individual quota rights, producers must use at least 70 % of their quota each year; otherwise the part not used is forfeited to the national reserve. According to the Irish authorities experience has shown that in order to retain sufficient numbers of ewes to fulfil the quota usage requirements, sheep producers in mountain farm areas generally maintain a number of ewes in excess of their full quota to avoid reduction penalties when losses occur. It should also be noted that, in Ireland, the application period for the 1999 ewe premium (see section I.(b) below) commenced on 8 December 1998, and that ewes applied for must be maintained by the applicant until the retention period expires on 18 April 1999. The farmers concerned will therefore maintain a number of ewes at least equal to 70 % of their individual quota, and possibly more, over this winter period, despite the hardship conditions.
- (26) In its decision on the first winter fodder aid (N 605/98) the Commission recognised that in schemes involving the payment of relatively small amounts of aid to large numbers of beneficiaries the individual calculation of actual losses incurred could result in disproportionate administrative expenses. The Commission therefore accepted that compensation could be calculated on the basis of average losses, provided that the risk of significant overcompensation could be excluded. In view of the explanations provided by the Irish authorities, and the fact that compensation is limited to a proportion of actual losses incurred, the Commission considers that the present measure excludes the risk of significant overcompensation at the level of the individual farmer.
- (27) Since the aid complies with the criteria used by the Commission to assess aid for compensation for damages due to exceptionally bad weather conditions, the Commission considers the aid to be compatible with the common market pursuant to Article 87(2)(b) of the Treaty.
- I.(b) Ewe premium**
- (28) In their notification the Irish authorities explain the economic background underlying their decision to introduce a disposal scheme for ewes which otherwise would not have a sufficient commercial value to be sold to slaughterers.
- (29) During autumn 1998, availability of competitively priced pork, chicken and beef has depressed the lamb market, in many of the main European markets. The impact has been especially acute in Ireland because of the extent of dependence on export markets, with as much as 75 % of production exported. For 1998 as a whole, the average price of lambs in Ireland was 19 % below that of last year.
- (30) The situation reached crisis point by mid-autumn when lamb processing plants ceased accepting cull ewes or light mountain lambs even from their traditional local farmer suppliers. In addition, during the 1998 growing season, severe wet weather and below average sunshine resulted in difficulties in saving adequate winter feed for animals. The situation was acute in some areas, particularly on peaty or heavy clay soils, and conditions were so poor that a large proportion of winter fodder could not be harvested due to ground conditions.
- (31) Farmers using commonage land, where no single owner takes action to protect the vulnerable grazing, were regarded as being at risk in the event of a fodder shortage. The welfare of sheep on these grazing lands was of particular concern, as producers with cull ewes which could not be slaughtered, had no option but to return these animals to an already fragile environment where supply of grazing was not adequate to meet the need. The scheme was consequently confined to mountain sheep farmers operating in the areas designated, that is mountain commonage in six western counties of Ireland (?). Total expenditure under the scheme was about IEP 1 million (EUR 1,27 million).
- (32) The scheme provided slaughter facilities to remove about 100 000 cull mountain ewes from mountain commonage land in six western counties of Ireland. The Department of Agriculture and Food made payments to sheep slaughter plants to provide slaughter facilities in the case of two categories of ewes which would not have had a sufficient commercial value to cover the slaughter and handling costs involved. Assistance was only provided in respect of the disposal of ewes during November and December 1998. Approximately 12 meat plants participated. The question of participation was a matter of choice for plant management. The payment was:
- IEP 10 (EUR 12,7) in the case of condemned animals which would not have any commercial value,
  - IEP 3 (EUR 3,8) in the case of ewes suitable for boning ("boner ewes") which would yield a limited value to plants in terms of the meat harvested.
- (33) In the case of animals which are condemned, the factory made no payment to the producer. According to information in the letter of 12 February 1999, 66 % of the animals culled were condemned and disposed of through the rendering plant.

(?) Donegal, Sligo, Leitrim, Mayo, Galway and Kerry.

(34) According to the Irish authorities' letter of 14 April 1999 the aid of IEP 3 per animal enabled the meat plants to enable to dispose of 35 300 "boner ewes". This amount covered the cost of disposal of soft offal and heads as Specified Risk Material to an approved rendering plant, as well as the cost of disposal of skins. These costs are normally borne by the meat plant and are indeed passed on to the producer in terms of an in-built deduction in the price of the lamb. For these animals the question of payment was for negotiation between producer and plant, and according to the Irish authorities only token sums were paid.

(35) Meat from the animals purchased by meat plants, under this arrangement, was sold for human consumption, subject to the normal conditions of health, hygiene and safety, which apply to all meat handled by these plants. The predominant commercial outlet for meat from boner ewes is supply to the catering trade. The meat is suitable for use as burgers, kebabs, ethnic dishes etc. It is estimated that the quantity of meat yield in this case would not have exceeded 150 tonnes in total and this meat found sale through the domestic festive food-service industry last December.

(36) The aid paid to factories covers only the costs which arise from killing, processing and handling the animal. Because the animals involved are over one year old there is a considerable cost associated with the disposal of specified risk material. In the case of carcasses which have been completely condemned, to minimise risk to the human food chain, factories have been directed to dispose of the whole carcass as specific risk material. The fee agreed by the Department should cover the full cost associated with condemned ewes but in the case of the second category, boner ewes, the fee paid by the Department will represent only a contribution of the costs involved. The balance will be contributed by the producer in terms of carcass meat value.

*Article 87(1) of the Treaty*

(37) Article 87(1) of the Treaty provides that any aid granted by a Member State or through State resources which distorts or threatens to distort competition by favouring certain undertakings or the production of certain goods shall, in so far as it affects trade between Member States, be incompatible with the common market.

(38) The Commission considers that the measure in question clearly constitutes aid within the meaning of this provision. The payments in question were granted by the Irish authorities directly to sheep slaughter plants in Ireland. However, these slaughter houses are not the economic beneficiaries of the aid as the payments were granted in return for the service of killing, processing and handling of the animals. The measure is intended to benefit the producers of ewes who have no normal market outlets for their animals and who would incur costs if they had to continue feeding them, or arrange for the slaughter of the animals at their own expense. By virtue of the measure sheep which otherwise did not have a sufficient commercial value can be put to the market at competitive prices.

(39) Therefore the measure concerning the disposal of over 100 000 ewes may threaten to distort the competition on the relevant market as it confers a gratuitous advantage to the beneficiaries. Such an unilateral measure by a Member State in a market which according to the Irish authorities themselves was seriously depressed and which, on the other hand, is highly integrated at Community level, and where substantial intra-Community trade takes place must be considered to affect trading conditions among Member States.

*Article 87(2) and (3) of the Treaty*

(40) The prohibition in Article 87(1) of the Treaty is followed by exemptions in Article 87(2) and (3).

*Damages caused by exceptional occurrences*

(41) Sub-paragraph b of Article 87(2) of the Treaty, in its second part provides for aid to make good the damage caused by exceptional occurrences. Ireland did not specifically put forward this provision to justify the present measure but given the Irish authorities' emphasis on the exceptionally bad weather in the growing season 1998 the Commission considers it appropriate to discuss this concept of its own initiative.

(42) Although it is true that in practice the combination of depressed markets and the fodder problem created a particularly difficult situation for the sheep producers, it appears appropriate to examine the measures separately which is also in line with the separate presentation by the Irish authorities in their notification. The ewe premium was at no place described as being linked to losses in winter fodder which might not be covered by the winter fodder aids.

(43) Indeed, from the description of the ewe premium provided by the Irish authorities, the measure appears to constitute a means of alleviating the economic strain on the producers stemming from falling demand and prices. The Irish authorities themselves state in their notification that "the negative market impact has manifested itself in a number of ways — low general prices even for top quality lambs, the disappearance of the traditional market for low grade cull ewes and difficulty in securing sale for the light mountain breed of lamb". At another place it is stated that the ewe premium was introduced "to re-establish this market at that stage of the year" (see letter of 14 April 1999).

(44) However, an economic downturn in a sector cannot qualify as an exceptional occurrence. Such a development rather constitutes a contingency inherent in the pursuit of economic activities. Article 87(2)(b) which as an exception to a rule has to be interpreted restrictively and which hitherto has been applied to occurrences such as BSE is therefore not applicable to the present situation.

(45) The other exemptions listed in Article 87(2), (3)(a) and (b) of the Treaty are manifestly inapplicable given the nature of the aid measure in question and its objectives. Ireland has not advocated their applicability.

*Article 87(3)(c) of the Treaty*

- (46) Article 87(3)(c) of the Treaty permits the Commission, by way of derogation, to declare to be compatible with the common market "aid to facilitate the development of certain economic activities or of certain economic areas, where such aid does not adversely affect trading conditions to an extent contrary to the common interest".
- (47) In their letter of 12 February 1999 the Irish authorities have contended that the measure must be seen as contributing to the improvement of the structural conditions of the producers concerned because the animals would have been accepted by meat plants for slaughter in normal years. The current legal requirement to dispose of specified risk material and condemned carcasses through an approved rendering plant involves cost to meat plants; this cost could be in excess of any value which the carcass may have and led meat plants to refuse to accept low grade animals. If the animals were not disposed of the pressure of heavier than normal stocking levels would endanger the viability of the whole stock, jeopardise the welfare of the animals as well as causing long-term damage to the land in question.
- (48) The Commission cannot accept the argument that the aid is justified because in normal years the ewes would have been accepted by the meat plants. This line of argumentation would imply that in general State aid may be granted to offset adverse market conditions. This would distort the allocation of economic resources as producers would be induced to take higher risks since they would not have to fully accept the consequences when markets take a downward turn.
- (49) Stabilisation of agricultural markets is an objective of the common agricultural policy as derives from Article 33(c) of the Treaty. The common market organisation for sheepmeat sets out to cushion negative price movements by means of various support mechanisms. By the same token, the Court has ruled in various instances that these support mechanisms have to be understood to be exhaustive, not leaving leeway for Member States to introduce similar measures<sup>(8)</sup>. The Irish measure appears to interfere with this price support system by providing for payments per head to remove certain animals from the market, thereby artificially increasing the commercial value of the remaining sheep for the producer. The Commission, therefore, considers that the Irish measure may constitute an alternative intervention mechanism which is liable to interfere with the system provided for in the common market organisation. Should these doubts be confirmed, the Commission would have no alternative but to find that the aid is contrary to the Treaty.
- (50) For this reason alone, the Commission is bound to express doubts as to the compatibility of this aid measure with the common market. In order to dispel these doubts, the Irish authorities are requested to provide full details of the criteria according to which the animals concerned were selected for slaughter, and an explanation of the reasons which led to what appears to be an abnormally high number of animals being condemned.
- (51) But even if the measure could be considered compatible with the common market organisation it is still necessary to verify whether it complies with the State aid rules of the Treaty (Article 22 of the common market organisation).
- (52) In regard of Article 87(3)(c) of the Treaty it is established Commission policy not to allow for operating aids, that is, aids which relieve economic operators of the whole or part of their normal operating costs. Operating aid only confers a short-term economic advantage to the beneficiary which ceases as soon as the payment of aid stops. Therefore such aids can in principle not be considered to facilitate the development of certain economic activities or of certain economic areas<sup>(9)</sup>.
- (53) The Commission doubts that the present measure can be considered to bring about structural improvements in the beneficiaries' holdings thereby facilitating the development of the sector as a whole. In order to justify the measure, the Irish authorities rely on four arguments: that the measure was necessary due to the depressed state of the market, that it was justified on animal welfare grounds, that it was necessary on environmental grounds and that it was necessary to offset the additional costs resulting from the need to dispose of specified risk material. For the reasons given above, the economic arguments concerning the general state of the market cannot be accepted by the Commission. As regards the other arguments, the Irish authorities have not so far dispelled the doubts of the Commission as to the compatibility of these measures with the Treaty, nor have they shown that the measures were implemented in such a way as to avoid adversely affecting trading conditions to an extent contrary to the common interest.
- (54) Although at present the Commission does not have a well-defined policy on the payment of State aid to alleviate animal welfare problems, it is of course aware of the increasing importance attached to this matter in Community and national legislation. The Commission will therefore examine proposals to grant aid on a case by case basis. In doing so, the Commission will seek to ensure that welfare arguments are not used as a pretext for the payment of aid which is in reality brought about by market conditions. At the present stage of the procedure, the Commission has serious doubts about the validity of the welfare arguments advanced by the Irish authorities. In particular, the information so far provided does not demonstrate the existence of a serious and immediate welfare problem which could justify the slaughter of such a large number of animals within a short time-scale. Indeed, it would appear that the principle problem referred to by the Irish authorities, malnutrition, could be remedied by the provision of adequate feed for the animals concerned.
- (55) The Irish authorities also refer to environmental considerations in order to justify the aid, and in particular the damage which the animals might cause to already waterlogged grasslands. However, it would also appear that this problem could be resolved by the provision of feed from alternative sources.

<sup>(8)</sup> Judgement of the Court of 12 June 1990, Case 35/88, KYDEP, [1990] ECR page I-3125, paragraph 29.

<sup>(9)</sup> Judgement of the Court of First Instance of 8 June 1995, T-459/93 Siemens v. Commission [1995] ECR II-1675, paragraphs 48 and 77.

(56) The Irish authorities have also referred to the extra costs for processing companies on account of national safety-requirements in requiring the disposal of specified risk materials (SRM)<sup>(10)</sup>. Accordingly, the premium of IEP 10 covers the full cost of disposing of animals with no commercial value, while the premium of IEP 3 covers the part of the cost of disposal in the case of animals with some residual commercial value. At this stage of the procedure, the Commission cannot see on what legal basis such aid could be considered to be compatible with the common market. So far it has only authorised payments relating to environmental taxes under stringent conditions (point 1.5.3 of the Community guidelines on State aid for environmental protection<sup>(11)</sup>) which require the aid to be temporary and degressive aid to enable livestock producers and to offset a loss of international competitiveness by allowing time for them to adapt to the additional costs imposed by national rules on the disposal. However, in the present case, the Commission notes that the aid is not related to an environmental tax. Moreover, it is granted selectively, in respect of a limited number of animals and for a limited geographical area, specifically in response to stated adverse market conditions which made it unprofitable for the slaughter houses to process the animals concerned.

(57) In view of the considerations set out above, the Commission doubts that the measure can be considered to facilitate the development of economic activities within the meaning of Article 87(3) of the Treaty. Rather the relief appears to be purely temporary and intended to shield producers from unfavourable market developments.

(58) Furthermore, by permitting the meat obtained from "boner ewes" to be sold on for human consumption, and thus compete in the market place with other meat, whose slaughter costs have not been subsidised, it appears that the Irish authorities have failed to take the steps necessary to minimise the effects of the measure on competition.

## II. NN 79/99 — SCHEME OF ASSISTANCE FOR WINTER FODDER LOSSES

(59) The third winter fodder scheme provides for three sub-measures directed at different groups of beneficiaries (sections II.(a), II.(b) and II.(c) in the following). The budget for II.(a) and II.(b) in total amounts to EUR 25,4 million; for submeasure C EUR 635 000 are foreseen.

### II.(a) New beneficiaries

(60) Aid under this title extends the circle of beneficiaries under N 605/98 to farmers who sustained winter fodder losses but did not receive aid under N 605/98 as they are not situated in these areas of the less-favoured areas identified as worst affected by the Teagasc survey of September 1998. In their notification of the N 605/98 scheme the Irish authorities had assumed that while all holdings in less-favoured areas were affected by the wet

weather the farmers in the areas which were not considered to be "seriously affected" should be in a better position to cope with losses. However, a further Teagasc report prepared in January 1999 showed that the situation in the Less Favoured Areas had deteriorated significantly and therefore the Irish authorities decided to make aid also available to producers situated in those areas which initially were deemed to be less seriously affected.

(61) Payment rates will be the same as in N 605/98 subject to the same ceiling of EUR 380 per beneficiary (see paragraph 4 above). In excess of 40 000 farmers are in this category.

### Article 87(2)(b) of the Treaty

(62) It has been stated earlier (see point 18) that aids to compensate producers for the damages caused by adverse weather conditions can be authorised provided that the resulting losses reach a certain minimum intensity, normally 30 %, reduced to 20 % in the case of the less favoured areas, in comparison with an average year. Once these thresholds are exceeded the aids granted may provide for the full compensation of the losses while regard must be had that farmers are not overcompensated.

(63) Since the areas listed by the Irish authorities are all less-favoured areas within the meaning of Directive 75/268/EEC the threshold for loss applicable is 20 %. According to the Irish authorities the surveys carried out by Teagasc have shown that the winter fodder difficulties in Less Favoured Areas are widespread with practically all farmers affected. The worst affected areas listed are Cavan, Monaghan, Clare, Donegal, Leitrim, Longford, Mayo, Roscommon and Sligo in the "north region". In the south region the relevant areas are Kerry, Cork west and east (Duhallow), Limerick west and certain limited areas of Laois and Tipperary. While there are variations within these areas there is a general situation of shortage of fodder varying from a 50 % shortfall to 20 % (Teagasc report, January 1999). The Commission therefore accepts that the relevant threshold of 20 % is reached and that the exemption provision laid down in Article 87(2)(b) of the Treaty in principle applicable.

(64) As regards the level of compensation the Irish authorities have explained in the context of N 605/98 that concerning suckler cow producers the average cost of feed during the winter amounts to approximately EUR 152 (IEP 120). The scheme provides for the payment of EUR 50,79 (IEP 40) per suckler cow up to a maximum of EUR 380 (IEP 300), equivalent to 7,5 suckler cows. The rate of payment per cow is therefore set at 33 % of the cost of feeding the animal. Given that the average size of suckler cow herds in Ireland is 12 cows, and the average loss of fodder production is well over 20 %, the Commission would see no reason to deviate from its assessment under N 605/98 according to which overcompensation is to be largely excluded as there only exists a risk in respect of farmers who would own fewer than 12 cows in the stock and whose losses would not exceed 33 % of their usual winter fodder

<sup>(10)</sup> The Commission has adopted a decision on 30 July 1997 on the prohibition of material presenting risks as regards transmissible spongiform encephalopathies (OJ L 216, 8.8.1997, p. 95). The coming into force of the decision has, however, been postponed hitherto and therefore disparate national legislation still exists.

<sup>(11)</sup> OJ C 72, 10.3.1994, p. 3.

supply (similar methods are used to calculate the losses of dairy and sheep farmers). In regard of this residual risk the Commission, in line with its assessment under State aid N 605/98, considers that that it would be disproportionate to expect the Irish authorities to undertake the individual processing of thousands of applications, each involving relatively small sums of money, to identify a relatively limited number of cases of limited possible overcompensation.

- (65) There remains, however, an open question concerning the intensity of production of the holdings concerned. In its letter of 31 March 1999 the Commission asked the Irish authorities whether they can confirm that the measure is aimed at traditional livestock farmers using extensive production methods, that is saving their own winter fodder requirements from production during the summer. The Irish authorities have in their letter of 29 April 1999 not exhaustively answered this question and only confirmed that this was the case for farmers benefiting of the special fodder hardship fund.
- (66) It is however indispensable for the Commission to know whether also the other beneficiaries produce extensively. In the case of farmers who usually buy in fodder and thereby complement their own fodder reserves providing for an aid corresponding to 33 % of the fodder need of a cow during winter would lead to overcompensation as in normal years a proportion of these 33 % would be at the charge of the producer.
- (67) As a consequence, at this point the Commission cannot exclude that by virtue of the present measure producers receive payments which go beyond compensating them for actually sustained losses of winter fodder. The Irish authorities are therefore invited to confirm that also the new beneficiaries pursue extensive production methods and do not normally buy-in fodder.

#### **II.(b) Top up payments to beneficiaries under N 605/99**

- (68) In recognition of the fact that farmers who have already received support under N 605/98 are located in the worst affected areas, a 50 % top-up payment will now be made available to them. The Agricultural Inspectorate of the Department in association with local Teagasc officials listed the worst affected areas by district electoral division (DED). There are 45 000 farmers in this category.
- (69) In the following the top-up premia and the resulting total premia are listed:
- EUR 2,5 per ewe or hogget up to 75 head for sheep farmers with mountain ewes leading to an overall grant of EUR 7,5 per animal,
  - EUR 25,4 per suckler cow up to a ceiling of 7,5 cows for suckler cow farmers leading to a total grant of EUR 76,19 per animal,
  - EUR 19 per 1 000 gallons up to 10 000 gallons for small scale dairy farmers leading to a total grant of EUR 57 per 1 000 gallons.

#### *Article 87(2)(b) of the Treaty*

- (70) Suckler cow producers are the main group of beneficiaries with 80 % of the aid being expected to be paid to them. As the costs for food per cow in winter in Ireland are approximately EUR 152 (see paragraph 65 above) an overall grant of EUR 76 corresponds to an aid rate of 50 %. Assuming that suckler cow producers in normal years do not buy-in fodder (the Irish authorities have confirmed this by letter of 29 October 1998 in the context of State aid N 605/98) in order to exclude overcompensation they ought to have consequently sustained losses of winter fodder of 50 % and more.
- (71) According to the Irish authorities (point 3 of the letter of 29 April 1999), the actual losses of winter fodder were considerably in excess of those originally estimated by the Teagasc-surveys in September 1998 and January 1999 which found the losses to be between 20 % and 50 % of normal winter fodder production. Furthermore the same safety mechanism already mentioned (see point 64) would apply which consists in paying compensation for up to 7,5 cow units when the average suckler cow herd in Ireland is over 12 cows. The Irish authorities are therefore of the opinion that the question of overcompensation does not arise.
- (72) However, the Irish authorities did not submit appropriate evidence which would demonstrate that the average level of winter fodder losses of the producers concerned reaches 50 % or more. Indeed, the latest Teagasc report (January 1999) they refer to speaks of losses of 20 % to 50 %. Since the correspondence of damages and compensation has so far not been demonstrated in a satisfactory manner the Commission is at this stage bound to emit doubts as to measure's compatibility with the common market pursuant to Article 87(2)(b) of the Treaty. The Irish authorities are invited to explain why notwithstanding the figures comprised in the Teagasc reports they are persuaded that overcompensation can be excluded.
- (73) In the same context the Commission would also invite the Irish authorities to further explain the argument presented in point 3 of their letter of 29 April 1999 to the effect that farmers with suckler cows would have experienced grazing and fodder losses not only for their cows but also for the progeny of these cows and that compensation had therefore also to be available for these weanlings. *Prima facie* this approach seems incongruous with the concept of compensation of losses in fodder production as compensation would not be established in accordance with fodder production in normal years but in relation to the current number of animals in the stock and their fodder requirements. Such an approach allows for aid relieving the producer of day-to-day expenses and would be incompatible with the concept underlying Article 87(2)(b) of the Treaty.
- (74) Hill sheep farmers depending on commonage grazing who have received grants under State aid schemes N 605/98 and NN 23/99 are also eligible for the top-up of 50 % by virtue of the present scheme. Their resulting total premium therefore amounts to EUR 20,32 (IEP 4 + IEP 10 + IEP 2).

(75) As the Irish authorities in the context of NN 23/99 submitted information according to which the extra cost of bought-in fodder amounted to on average approximately EUR 29,20 (IEP 23) per ewe for the producers concerned (see paragraph 23 above), and that the fodder losses for hill sheep farmers are virtually 100 % (as the grazing option on which they normally depend is largely unavailable, see letter of 14 April 1999), the Commission is satisfied that in their regard overcompensation by virtue of the present sub-measure can be excluded.

### II.(c) The special fodder hardship fund

(76) In addition a special fodder hardship fund (SFHF) will operate for a small number of farmers who have not qualified for aid in 1998 and who would not qualify for aid under the first sub-measure (see section II.(a) above) of the present scheme. The objective is to grant aid to small farmers almost totally dependent on a relatively small farm enterprise as a source of income. Severe fodder shortage would have to be demonstrated by each applicant and certified by a Teagasc advisor.

(77) In their letter of 29 April 1999 the Irish authorities have further described the conditions under which aid will be granted under the special fodder hardship fund scheme (SFHF). Having examined the terms of reference of the SFHF the Commission at this stage doubts whether the measure can be considered to be compatible with the common market.

#### *Article 87(2)(b) of the Treaty*

(78) Pursuant to the measure the amount of fodder (roughage) available on the farm must be certified by a Teagasc advisor as being less than 50 % of that necessary to adequately maintain livestock until turn out to grass (taken as 15 April). There is, however, no indication that grants under the measure would be conditional on or in proportion to losses of winter fodder due to wet weather. Assistance appears rather to be possible in respect of any farmer who can prove that his cattle are suffering or are likely to suffer malnutrition due to a shortage of fodder independently of the reason for this. From this follows that Article 87(2)(b) of the Treaty does not seem to be applicable.

#### *Article 87(3)(c) of the Treaty*

(79) The Irish authorities have stated that the potential of the situation was such to develop into a serious animal welfare problem and that therefore the measure was justified. The Commission has therefore considered whether the SFHF can be justified under Article 87(3)(c) of the Treaty as a measure which facilitates the development of the sector while not affecting trading conditions to an extent contrary to the common interest.

(80) It has already been stated in the above (see point 54) that the Commission will examine proposals to grant aid in connection with animal welfare issues on a case by case basis. In doing so, the Commission will seek to ensure

that welfare arguments are not used as a pretext for the payment of aid which is in reality brought about by market conditions.

(81) At the present stage of the procedure, the Commission has doubts about the validity of the welfare argument advanced by the Irish authorities. In particular, the information so far provided does not demonstrate that aid under the SFHF did not simply have the effect of supporting farmers in respect of circumstances and risks which must be deemed to be inherent in activities of an entrepreneurial character. At this stage there is no indication that the measure was justifiable on grounds which could be considered to be external to the producers' sphere and their responsibility as economic agents. Also the Irish authorities' argument to the effect that the situation had the potential to evolve into a serious animal welfare problem has not further been substantiated by recourse to relevant data. If the Irish authorities wish to sustain this argument they are invited to submit further information allowing for a verification of this assertion.

(82) Presently the Commission cannot exclude that the measure constitutes an operating aid as it is not likely to bring about structural improvements in the beneficiaries' holdings thereby facilitating the development of the sector as a whole. It has to be noted that in regard of Article 87(3)(c) of the Treaty it is established Commission policy not to allow for operating aids, that is aids which relieve economic operators of the whole or part of their normal operating costs. Operating aid only confers a short-term economic advantage to the beneficiary which ceases as soon as the payment of aid stops. Therefore such aids can in principle not be considered to facilitate the development of certain economic activities or of certain economic areas <sup>(12)</sup>.

(83) In the light of its doubts about the compatibility of this measure both with the common organisation of the market and with Articles 87 and 88 of the Treaty, the Commission has decided to open the procedure provided for in Article 88(2).

In the light of the foregoing considerations, the Commission invites Ireland to submit its comments within one month following receipt of this letter. It further requests your authorities to forward a copy of this letter to the recipients of the aid immediately.

The Commission wishes to remind the Irish authorities that Article 88(3) of the Treaty has suspensory effect and that according to Article 14 of the Procedural Regulation <sup>(13)</sup> the Commission shall decide that all aids granted unlawfully and found to be incompatible with the common market must be recovered from the recipient. Depending on the relevant provisions of national law the amounts thus recovered will include interest calculated on the basis of the reference rates used to calculate the grant-equivalent for the purposes of regional aids, running from the date on which the aid was payable to the recipient until the date of actual recovery.'

<sup>(12)</sup> See footnote 9.

<sup>(13)</sup> Council Regulation (EC) No 659/99 of 22 March 1999 laying down detailed rules for the application of Article 88 of the EC Treaty, published in OJ L 83, 27.3.1999.

## AYUDAS ESTATALES

**Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE sobre el asunto C 33/98 (ex N 332/99 y C 33/98) — España: Nueva aportación de capital a Babcock Wilcox España SA**

(1999/C 280/06)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 23 de julio de 1999, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a España su decisión de ampliar el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 iniciado con relación al asunto C 33/98 a fin de incluir la medida arriba indicada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea  
Dirección General de Competencia (IV)  
Dirección H  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles/Brussel  
Fax (32-2) 296 95 80.

Dichas observaciones serán comunicadas a España. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo, puede exigirse al beneficiario de una ayuda ilegal su devolución.

En abril de 1998 la Comisión inició el procedimiento del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE con relación a dos aportaciones de capital efectuadas por el holding público español SEPI en 1994 y en 1997 por un total de 20 000 millones de pesetas españolas <sup>(1)</sup>.

Mediante carta de 16 de junio de 1999, las autoridades españolas notificaron una nueva aportación de 41 000 millones de pesetas españolas al capital de BWE.

La nueva aportación de capital de SEPI a BWE parece haberse decidido pese a no haber perspectivas razonables de recuperar la inversión. Como bien han reconocido las autoridades españolas, esta aportación de capital constituye una medida preventiva destinada a cumplir la obligación del accionista de BWE de aumentar el capital de la empresa, mermado por las continuas pérdidas, hasta el mínimo exigido por el derecho de sociedades español antes de que finalmente BWE sea privatizada. Los desastrosos resultados obtenidos por BWE últimamente, que la han llevado al borde de la quiebra, y la perspectiva de una privatización inmediata de la empresa demuestran que la nueva aportación de capital difícilmente producirá un rendimiento adecuado para el inversor. Por lo tanto, esta nueva aportación de capital debe considerarse como una ayuda con arreglo al apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE.

A primera vista, la nueva ayuda parece incompatible con el mercado común. Aunque servirá para financiar medidas destinadas a ajustar la plantilla de BWE a unos niveles más acordes con unas previsiones razonables de la reducida cuota de mercado de la empresa en el futuro, estas medidas no bastarán por sí mismas para que la empresa sea viable a largo plazo. Su

viabilidad sólo puede lograrse adoptando medidas complementarias de carácter comercial, industrial y tecnológico. En este caso, tales medidas dependen del programma de reestructuración que ponga en práctica el comprador de BWE tras la venta de la empresa por el Estado. Por consiguiente, la compatibilidad final de esta nueva aportación de capital, así como de la ayuda ya incluida en el procedimiento, se evaluará a la luz de las características del programa de reestructuración que el comprador de BWE aplique.

**«I. Procedimiento**

- (1) En marzo de 1997, las autoridades españolas notificaron su intención de proceder a una aportación de capital de 10 000 millones de pesetas españolas en favor de BWE. La notificación incluía un programa de reestructuración.
- (2) En abril de 1998, la Comisión inició el procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en lo relativo tanto de la aportación de capital notificada como a otra aportación anterior de otros 10 000 millones de pesetas españolas realizada en 1994, de la que se tuvo conocimiento por medio de la información adjunta a la notificación. Ambas aportaciones de capital se destinaron esencialmente a financiar una importante reducción de puestos de trabajo, en un número superior a 500. El programa de reestructuración notificado por las autoridades españolas en marzo de 1997 se consideró inaceptable puesto que había serias dudas sobre su viabilidad y, por tanto, no se ajustaba a las condiciones de compatibilidad establecidas en las Directrices comunitarias sobre ayudas estatales salvamento y de reestructuración de empresas en crisis de 19 de septiembre de 1997 <sup>(2)</sup>.

<sup>(1)</sup> Véase DO C 249 de 8.8.1998.

<sup>(2)</sup> Véase el DO C 283 de 19.9.1997.



- (3) En octubre de 1998, las autoridades españolas remitieron sus comentarios en el marco del procedimiento del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE.
- (4) Por carta de 16 de junio de 1999, las autoridades españolas notificaron una nueva aportación de capital a BWE por importe de 41 000 millones de pesetas españolas <sup>(3)</sup>.

## II. Babcock Wilcox España SA ("BWE")

- (5) BWE es una filial al 100 % del *holding* público español SEPI. La empresa fue adquirida por el Estado en 1978, con una plantilla de 5 600 trabajadores, después de la crisis del petróleo. Desde que pertenece al sector público, BWE ha pasado por diversos procesos de reestructuración y reorganización, reduciendo sus actividades y centrándose en unas pocas operaciones fundamentales. En la actualidad, opera como fabricante de instalaciones llave en mano y de equipos para el sector energético. En la primera mitad de los años 90, BWE registró beneficios moderados. El primer intento de privatizar BWE se produjo en septiembre de 1998, cuando el grupo Kvarner acordó la compra de BWE. Al final, el acuerdo no se firmó debido a la crisis interna del grupo a raíz de un exiguo resultado financiero. A principios de 1999, las autoridades españolas abrieron un segundo procedimiento de privatización de BWE y, en mayo de 1999, seleccionaron sendas ofertas presentadas por los grupos McDermott y Deutsche Babcock-Steinmüller. Las negociaciones aún están en curso, pero ha concluido la puesta a disposición de los interesados de la información pertinente (*due diligence*).

## III. La nueva aportación de capital

- (6) El *holding* público SEPI se verá obligado en los próximos días a realizar una aportación de capital de 41 000 millones de pesetas españolas a BWE, dado que sus pérdidas acumuladas han mermado sus fondos propios hasta situarlos por debajo del mínimo legal establecido en el Derecho de sociedades español. La posición financiera de BWE se ha deteriorado considerablemente como consecuencia de la fallida venta a Kvarner. BWE está registrando sólo la mitad del volumen de negocios previsto en su plan de actividad durante las negociaciones con Kvarner. En la actualidad, BWE da empleo a 1 187 trabajadores. Su volumen de negocios en 1998 fue de 20 643 millones de pesetas españolas, con unas pérdidas en sus actividades ordinarias de 9 737 millones y de 26 931 millones en la cuenta de resultados extraordinarios. Estas cifras se han de contrastar con una previsión inicial de 56 000 millones de pesetas españolas de volumen de negocios, unos beneficios ordinarios de 2 050 millones y unos beneficios en la cuenta de resultados extraordinarios de 270 millones.
- (7) Las autoridades españolas han señalado que esta nueva aportación de capital se ajusta, asimismo, a las condiciones mínimas de adquisición formuladas por los dos licitadores seleccionados. Ambos consideran que BWE ha de adaptar su tamaño a una estructura viable. Según las es-

timaciones, BWE tendría que realizar un volumen de negocios anual de 60 000 millones de pesetas españolas corrientes, para lograr una situación de equilibrio con su estructura actual. Parece viable que el volumen de negocios de BWE pueda alcanzar 35 000 millones de pesetas españolas corrientes. Por tanto, la plantilla y la capacidad se han de reducir en un 40 %-45 % para que se correspondan con el nivel de ingresos previsto.

- (8) Se hará el siguiente uso de los 41 000 millones de pesetas españolas: 16 500 millones para compensar obligaciones relacionadas con un déficit en el fondo de pensiones para los trabajadores despedidos con ocasión de anteriores medidas de reestructuración, y 24 500 millones para financiar una nueva reducción de la plantilla en unos 500 puestos de trabajo.

## IV. Evaluación

- (9) La nueva aportación de capital de 41 000 millones pesetas españolas en favor de BWE constituye –al igual que las aportaciones ya cubiertas por el procedimiento C 33/98 con arreglo al apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE– una concesión de fondos públicos a una empresa en graves dificultades financieras.
- (10) La Comisión aplica el principio del inversor en una economía de mercado como parámetro para determinar si la concesión de fondos estatales a empresas públicas contiene elementos de ayuda a efectos del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE y, en caso afirmativo, para cuantificar tal ayuda.

El principio del inversor en una economía de mercado, tal y como se establece en la Comunicación de la Comisión de 13 de noviembre de 1993 <sup>(4)</sup>, dispone que cuando un Estado concede financiación a una empresa en circunstancias que serían inaceptables para un inversor que opera en condiciones normales de economía de mercado se está ante una ayuda estatal.

- (11) La nueva aportación de capital que SEPI hará a BWE parece haberse decidido al margen de toda expectativa razonable de recuperar la inversión. Según reconocen las autoridades españolas, esta aportación de capital constituye una medida preventiva destinada a cumplir la obligación de los accionistas de BWE de restablecer el capital de la empresa, mermado por pérdidas continuadas, hasta situarlo en el mínimo establecido por el Derecho de sociedades español antes de que BWE sea, finalmente, privatizada. Además, el pésimo rendimiento económico de BWE en el pasado reciente, que ha situado a la empresa al borde de la quiebra, y las perspectivas de privatización inminente de la empresa demuestran que es poco probable que la nueva aportación de capital garantice al inversor una tasa de rendimiento adecuada. Por consiguiente, la nueva aportación de capital se ha de considerar constitutiva de ayuda a efectos del apartado 1 del artículo 87 del Tratado CE.

<sup>(3)</sup> Véase la sección III a continuación.

<sup>(4)</sup> DO C 307 de 13.11.1993.

(12) En estos momentos, la nueva ayuda parece incompatible con el mercado común. Aun cuando la nueva aportación de capital vaya a utilizarse para financiar medidas destinadas a ajustar la plantilla de BWE a un nivel que se corresponda con las previsiones realistas sobre su reducida presencia futura en el mercado, tales medidas no parecen suficientes, por sí solas, para restablecer la rentabilidad a largo plazo de la empresa. La rentabilidad sólo puede garantizarse si se adoptan medidas complementarias en los ámbitos comercial, industrial y tecnológico. Esas medidas dependen en el presente caso del programa de reestructuración que el comprador de BWE ponga en marcha tras la venta de la empresa por parte del Estado. Por consiguiente, la compatibilidad definitiva de esta nueva aportación de capital, al igual que la de la ayuda ya cubierta con motivo de la incoación inicial del procedimiento, se habrá de evaluar a la luz de las características del programa de reestructuración que adopte el comprador de BWE.

### V. Conclusiones

(13) En consecuencia, la nueva aportación de capital de 41 000 millones de pesetas españolas constituye una ayuda a efectos del apartado 1 del artículo 88 del Tratado CE y no parece cumplir, en estos momentos, los requisitos establecidos para que pueda concluirse que se satisfacen las condiciones de la letra c) del apartado 3 del artículo 87 del Tratado CE, según lo dispuesto en las Directrices comunitarias sobre ayudas de Estado de salvamento y de rees-

tructuración de empresas en crisis de 19 de septiembre de 1997 <sup>(5)</sup>.

A la luz de las consideraciones expuestas, la Comisión, insta a España, con arreglo al procedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, a que en el plazo de un mes desde la fecha de recepción de la presente carta le remita sus comentarios y toda la información que pueda ser de utilidad para evaluar la nueva aportación de capital en cuestión. Se recuerda a España que uno de los elementos esenciales para evaluar la compatibilidad definitiva de esta aportación de capital y de las ayudas previas cubiertas por el procedimiento inicial es el programa de reestructuración de BWE que el comprador llevará a cabo tras la privatización de la empresa. Por consiguiente, se insta a España a que transmita a la Comisión toda la información relevante sobre las características de dicho programa en cuanto éste obre en su poder. La Comisión pide a sus autoridades que remitan sin demora una copia de la presente carta a SEPI y a BWE.

La Comisión desea recordar a España el efecto suspensivo del apartado 3 del artículo 88 del Tratado CE y llamar su atención sobre la carta a los Estados miembros de 22 de febrero de 1995, en la que se establece que toda ayuda concedida ilícitamente puede ser reclamada al beneficiario conforme a las disposiciones pertinentes de la legislación nacional. Los importes recuperados incluirán intereses al tipo de referencia utilizado para el cálculo del equivalente de subvención de las ayudas regionales, desde la fecha del pago de la ayuda al beneficiario hasta el momento de su recuperación efectiva.».

<sup>(5)</sup> DO C 283 de 19.9.1997.

## AYUDAS ESTATALES

### **Invitación a presentar observaciones en aplicación del apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE, sobre la medida C 55/99 (ex N 534/97) Países Bajos — Modificación de las exacciones parafiscales con las que se financian las actuales ayudas destinadas a la reducción de capacidad en el sector de los mataderos de ganado vacuno**

(1999/C 280/07)

Por carta de 10 de agosto de 1999, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a los Países Bajos su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 del Tratado CE en relación con la ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones, en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea  
Dirección General de Agricultura  
Dirección de Legislaciones Económicas Agrarias  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles/Brussel  
Fax (32-2) 296 21 51

Dichas observaciones serán comunicadas a los Países Bajos. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

Mediante carta de 6 de julio de 1997, la Representación de los Países Bajos ante la Unión Europea notificó a la Comisión una modificación de la medida de ayuda en vigor N 463/93, autorizada el 31 de diciembre de 1993 mediante decisión SG(93) D 21676 y modificada en última instancia por la ayuda N 452/95, autorizada el 5 de julio 1995 mediante decisión SG(95) D/034633.

La medida inicial estaba destinada a reducir el actual excedente de capacidad del sector de los mataderos de ganado vacuno. A tal efecto, el Fondo de reestructuración de mataderos de ganado vacuno (Stichting Sanering Runderslachterijen), creado por el Consejo regulador de productos del ganado vacuno (Productschap voor Vee en Vlees), adquiere capacidad de sacrificio.

Dado que se ha generado nueva capacidad excedentaria, el Fondo desea adquirir la capacidad suplementaria que se ponga en venta a raíz de la quiebra o el cierre de mataderos de ganado vacuno. A este respecto, las autoridades neerlandesas han notificado el incremento de una exacción parafiscal cuyo producto se destinará a la adquisición de una capacidad de 120 000 sacrificios anuales (es decir, la capacidad de una empresa que quebró), reduciendo así la capacidad total a 1,26 millones de animales. Con el nuevo incremento, la exacción parafiscal pasaría de 150 000 florines neerlandeses a 195 000 florines neerlandeses por tanto por ciento de la capacidad.

La Comisión ha decidido incoar, respecto de esta medida, el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88.

Las autoridades neerlandesas consideran que la medida puede autorizarse a la luz de la política de la Comisión en lo que respecta al abandono de la producción. Sin embargo, la Comisión cuestiona la justificación esgrimida por las autoridades neerlandesas.

Dejando al margen el componente social de la ayuda, se concede un importe de [...] (\*) de florines neerlandeses por el compromiso de no utilizar los mataderos, importe que parece muy elevado a la vista de las condiciones de mercado imperantes. El excedente de capacidad seguirá siendo considerable aun después de la adquisición de la cuota antes mencionada. Es poco probable que en un mercado tan sobresaturado pudiera haber compradores interesados en adquirir la empresa en quiebra, a menos que el precio fuera muy bajo. Tampoco cabe excluir que la capacidad abandonada carezca de valor alguno. Es posible, por tanto, que la ayuda no fuera necesaria. A este respecto, cabe subrayar que las excepciones previstas en el Tratado para permitir ayudas estatales únicamente son aplicables si la Comisión puede determinar que, de no otorgarse la ayuda, las fuerzas del mercado, por sí mismas, no inducirían al beneficiario a actuar de manera que pudiera contribuir a alcanzar alguno de los objetivos fijados en el Tratado.

Aun en el supuesto de que pudiera demostrarse la necesidad de la ayuda, será preciso comprobar que la contraprestación no sea excesiva. La comparación con los importes abonados por la compra de empresas en funcionamiento no resulta pertinente y no permite descartar que en este caso la contraprestación haya sido excesiva. Cabe subrayar asimismo que no se ha presentado prueba alguna que evidencie un posible interés en la adquisición de la empresa en quiebra. Tal manifestación de interés habría demostrado la necesidad de la ayuda y habría proporcionado una referencia a la hora de determinar el importe de la ayuda para la adquisición de capacidad.

(\*) Datos confidenciales.

La Comisión decidió asimismo incoar el procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 88 respecto de ciertos aspectos del plan inicial. El 31 de diciembre de 1993, la Comisión autorizó la ayuda N 463/93, medida que se financia mediante una exacción obligatoria sobre todos los mataderos de ganado vacuno. El producto de dicha exacción en 1993 se estimaba en 350 000 florines neerlandeses (aproximadamente 160 000 euros). Las autoridades neerlandesas han indicado que, en realidad, no se ha recaudado exacción alguna correspondiente a los años 1993 y 1994. El 5 de julio de 1995, la Comisión autorizó la ayuda N 452/95. Esta medida, que comporta un incremento de las ayudas y de las exacciones parafiscales, excluye del plan además a las pequeñas empresas. El presupuesto correspondiente a 1995 y 1996 asciende, según las estimaciones, a 15 millones de florines neerlandeses anuales (aproximadamente 7 millones de euros).

De acuerdo con los datos contenidos en una denuncia presentada contra este plan, el coste total de la reforma hasta 1995 fue de 56 millones de florines neerlandeses (25 millones de euros, aproximadamente), cifra considerablemente superior a los importes indicados en las medidas notificadas. La información facilitada por las autoridades neerlandesas en la notificación de la modificación del plan inicial parece corroborar que el presupuesto total ascendió a 50 millones de florines neerlandeses, sobrepasando así ampliamente el presupuesto previsto en la medida notificada a la Comisión.

Es evidente que un incremento tan considerable del presupuesto y el consiguiente aumento de la capacidad adquirida han debido tener repercusiones en el sector y asimismo en los intercambios comerciales. Así las cosas, resulta oportuno volver a examinar la medida a la luz de los nuevos datos, de los que se desprende que una proporción importante de la ayuda no ha sido notificada.

#### „I. PROCEDURE

Bovengenoemde steunmaatregel is overeenkomstig artikel 88, lid 3, van het Verdrag bij de Commissie aangemeld, bij brief van 6 juli 1997, geregistreerd op 13 juli 1997. Bij brieven van 6 november 1997, 30 juli 1998, 6 november 1998 en 11 mei 1999, geregistreerd op respectievelijk 10 november 1997, 5 augustus 1998, 11 november 1998 en 21 mei 1999, zijn aanvullende gegevens verstrekt.

Uiterste datum: 21 juli 1999.

#### II. BESCHRIJVING

##### A. Titel

Wijziging van parafiscale heffingen ter financiering van een bestaande steunmaatregel voor capaciteitsinkrimping in de runderslachtsector.

##### B. Maatregel

Het betreft een wijziging van een bestaande maatregel (maatregel nr. N 463/93), goedgekeurd op 31 december 1993 bij Besluit SG(93) D21676, laatstelijk gewijzigd onder nr. N 452/95, goedgekeurd op 5 juli 1995 bij Besluit SG(95) D/034633.

Met de oorspronkelijke maatregel werd beoogd de overcapaciteit in de runderslachtsector in te krimpen. Met het oog hierop wordt slachtcapaciteit uitgekocht door de Stichting Sanering Runderslachterijen.

Inmiddels is opnieuw overcapaciteit ontstaan. De stichting wenst dan ook extra capaciteit op te kopen die vrijkomt als gevolg van faillissementen of sluitingen van runderslachterijen. Hiertoe moet de parafiscale heffing verder worden verhoogd, van 150 000 NLG tot 195 000 NLG, per procent capaciteitsaandeel.

In hun brief van 6 november 1998 verklaren de Nederlandse autoriteiten dat voor het bedrijf Wolff Vlees in totaal een bedrag van [...] <sup>(1)</sup> NLG is betaald ([...] NLG voor de slachtcapaciteit en [...] NLG voor een beperkt sociaal plan). Aangezien de capaciteit van dit bedrijf 125 000 slachtingen per jaar bedraagt, komt dit neer op een uitkoopsom van [...] NLG per vleeshaak (exclusief sociale kosten). Bij de saneringsoperatie van 1995 bedroeg de uitkoopsom per vleeshaak gemiddeld [...] NLG.

De Nederlandse autoriteiten bevestigen evenwel dat tot dusver geen steun is uitbetaald. De vleeshaken worden uitgekocht door de stichting, een privaatrechtelijke instelling die is opgericht door samenwerkende runderslachterijen. Indien de stichting overeenstemming bereikt met een slachthuis, betaalt zij de overeengekomen compensatie. In dit stadium is nog geen sprake van staatssteun. Vervolgens vraagt de stichting het productschap om een bedrag dat gelijk is aan de betaalde compensatie en dat wordt betaald uit de opbrengst van de door het productschap opgelegde parafiscale heffingen. Het door het

productschap betaalde bedrag moet worden beschouwd als staatssteun. De Nederlandse autoriteiten hebben bevestigd dat de stichting in het onderhavige geval de compensatie heeft uitbetaald aan Wolff Vlees, maar dat het productschap niet heeft betaald aan de stichting en dit pas zal doen als de Commissie haar goedkeuring heeft gegeven. Het bedrag dat aan de stichting zal worden uitgekeerd, komt overeen met het nettobedrag dat deze heeft betaald aan het uitgekochte bedrijf, zonder vergoeding van de rente die de stichting heeft moeten dragen voor de lening om de betaling van de compensatie aan Wolff Vlees te financieren. De Nederlandse autoriteiten garanderen dan ook dat nog geen steun is uitbetaald en dat geen steun retroactief zal worden uitbetaald zolang de Commissie de steunmaatregel niet heeft goedgekeurd.

De Nederlandse autoriteiten verklaren voorts dat de andere partijen bij het geding voor het Gerecht van Eerste Aanleg (zaken T-197/97 en T-198/97) zich schriftelijk akkoord hebben verklaard met de door de stichting aan Wolff Vlees betaalde compensatie.

### C. Overzicht van de capaciteitsinkrimping

Bij brief van 11 mei 1999 hebben de Nederlandse autoriteiten de volgende gegevens verstrekt over het verloop van de capaciteitsvermindering:

#### 1. Overzicht van de jaarlijkse capaciteitsinkrimping

Jaar	Capaciteit	Naam bedrijf	Saneringsbedrag	Bedrag per vleeshaak
1995	850	Grif-Bo (runderlijn)	[...]	[...] NLG
1995	20 000	Beimer BV	[...]	[...] NLG
1995	1 000	Slachterij Midden-Nederland	[...]	[...] NLG
1995	12 000	ESA (runderlijn)	[...]	[...] NLG
1995	25 000	Wibeka BV	[...]	[...] NLG
1995	112 000	Jansen & Sonnenberg	[...]	[...] NLG
1995	40 000	P. de Jong Vlees	[...]	[...] NLG
1995	120 000	R'dams runderslachthuis	[...]	[...] NLG
1995	21 000	Stoltes Vee- en vleeshandel	[...]	[...] NLG
1997	125 000	Wolff Vlees	[...]	[...] NLG
Totaal	476 850		52 693 500 NLG	

In de bovengenoemde bedragen zijn de kosten voor een sociaal plan niet inbegrepen. Deze sociale kosten zijn rechtstreeks uitgekeerd aan de voormalige werknemers in de vorm van aanvullingen op lage lonen of werkloosheidsuitkeringen, en niet in de vorm van rechtstreekse betalingen aan de bedrijven. Het gaat om ongeveer [...] NLG.

<sup>(1)</sup> Op verzoek van de Nederlandse autoriteiten zijn bepaalde vertrouwelijke gegevens weggelaten.

De reële kosten voor de uitkoop van capaciteit kunnen niet worden meegedeeld, omdat ze per geval verschillen en afhankelijk zijn van een aantal factoren: (i) de door onafhankelijke deskundigen berekende waarde van het bedrijf, rekening houdend met de waarde van gebouw en inventaris; en (ii) de overeenkomst die is gesloten tussen de stichting en het bedrijf. Doordat de kosten worden berekend aan de hand van de waarde van het bedrijf, kunnen de kosten voor de uitkoop van vleeshaken aanzienlijk van elkaar verschillen.

## 2. Overzicht van de parafiscale heffingen

Jaar	Opbrengst
1995	6 250 000 NLG
1996	15 000 000 NLG
1997	16 500 000 NLG
1998	19 500 000 NLG
Totaal	57 250 000 NLG

De heffingsverordening is op 1 augustus 1995 van kracht geworden. Over de jaren 1993 en 1994 is derhalve geen heffing toegepast. De heffing is pas effectief geheven toen de eerste runderslachterij daadwerkelijk werd uitgekocht.

### D. Begunstigden

Runderslachtsector.

### E. Duur

Onbepaald.

## III. BEOORDELING

De Commissie heeft er nota van genomen dat deze aanmelding een wijziging betreft van een parafiscale heffing ter financiering van een bestaande steunmaatregel. Sinds het laatste besluit over deze regeling is genomen, zijn bij de Commissie echter klachten over deze steunmaatregel en heffingsregeling ingediend. Met het oog op de door de klagers aangevoerde argumenten lijkt het noodzakelijk na te gaan of de redenen om geen bezwaar te maken tegen de bestaande regeling nog steeds gelden, voordat de Commissie een standpunt kan innemen over de gewijzigde regeling. Voorts moet de Commissie de Nederlandse autoriteiten erop wijzen dat deze uitkoopregeling momenteel in behandeling is bij het Gerecht van Eerste Aanleg (zaken T-197/97 en T-198/97) en dat de afloop daarvan ook van invloed zal zijn op het besluit inzake deze steunmaatregel.

### A. Oorspronkelijke uitkoopregeling

Op 31 december 1993 heeft de Commissie steunmaatregel nr. N 463/93 goedgekeurd. Deze maatregel had tot doel steun te verlenen voor de uitkoop van de overcapaciteit aan vlesshaken van bedrijven. De maatregel werd gefinancierd uit een verplichte heffing op alle runderslachterijen. Voor 1993 is de opbrengst van de heffing op 350 000 NLG geraamd (ca. 160 000 EUR). De Nederlandse autoriteiten hebben evenwel verklaard dat in 1993 en 1994 in feite geen heffingen zijn toegepast.

Op 5 juli 1995 heeft de Commissie steunmaatregel nr. N 452/95 goedgekeurd. Deze maatregel voorzag in een verhoging van de steunbedragen en de parafiscale heffingen en sloot kleine bedrijven van de regeling uit. Het budget voor 1995 en 1996 is op 15 miljoen NLG per jaar geraamd (ca. 7 miljoen EUR).

De uitkoopregeling is momenteel in behandeling bij het Gerecht van Eerste Aanleg (Zaken T-197/97 en T-198/97). Bij DG IV was namelijk een klacht ingediend op basis van de mededingingsregels. De Commissie heeft deze klacht op 23 april 1997 afgewezen. Tijdens de aan de afwijzing van de klacht voorafgaande zitting hebben de klagers verklaard dat de totale saneringskosten tot 1995 56 miljoen NLG bedroegen (ca. 25

miljoen ECU), wat aanzienlijk meer is dan de in de aangemelde steunmaatregelen vermelde bedragen.

De gegevens die de Nederlandse autoriteiten bij de aanmelding van de wijziging van de oorspronkelijke regeling hebben verstrekt, lijken te bevestigen dat het totale budget ongeveer 50 miljoen NLG bedroeg, en dus aanzienlijk hoger ligt dan het in de aangemelde maatregel geplande budget.

Een zo belangrijke verhoging van het budget en de daaruit voortvloeiende verhoging van de uitgekochte capaciteit hebben noodzakelijkerwijs gevolgen gehad voor de gehele sector en voor het handelsverkeer: doordat meer capaciteit is uitgekocht, zijn de prijzen minder gedaald dan anders het geval was geweest; het zou dus kunnen dat bepaalde bedrijven die anders niet levensvatbaar waren geweest, nu hebben kunnen overleven. De kosten voor de hele operatie zijn evenwel ook gedragen door levensvatbare bedrijven die reeds op volle capaciteit werkten en dus niet profiteerden van de vrijgekomen slachtcapaciteit. In dit verband hebben de Nederlandse autoriteiten verklaard dat de in 1995 ingevoerde maatregel tot een zeker evenwicht heeft geleid tussen het aanbod van runderen en de slachtcapaciteit.

Het lijkt dan ook noodzakelijk de hele maatregel opnieuw te bezien in het licht van deze aanvullende gegevens, waaruit blijkt dat een belangrijk deel van de steun niet is aangemeld.

### B. Wijziging van de regeling

De onderhavige wijziging is op 6 augustus 1997 aangemeld en voorzag in de mogelijkheid om extra capaciteit uit te kopen na faillissement of stopzetting van de bedrijfsactiviteit.

Hoewel eerdere uitkopen in 1995 tot een zeker evenwicht hebben geleid, is opnieuw overcapaciteit ontstaan. Begin 1997 bedroeg de capaciteit 1,38 miljoen slachtingen per jaar. Mede als gevolg van de BSE-crisis valt een verdere vermindering van het aanbod te verwachten. Voor 1997 is het aantal slachtingen geraamd op 1,125 miljoen (een vermindering met 6,6%). Tot het jaar 2000 kan een verdere vermindering worden verwacht, tot ongeveer 1,025 miljoen slachtingen per jaar. De Nederlandse autoriteiten hebben een verhoging van de parafiscale heffingen aangemeld, waarvan de opbrengst zal worden gebruikt om capaciteit voor 120 000 slachtingen per jaar uit te kopen (d.w.z. de capaciteit van het betrokken bedrijf) en zo de capaciteit te reduceren tot 1,26 miljoen dieren.

#### 1. Motivering door de Nederlandse autoriteiten

De Nederlandse autoriteiten achten de wijziging verenigbaar met het EG-Verdrag omdat ze in overeenstemming is met het beleid van de Commissie inzake stopzetting van de productie:

a) *De steun moet in het algemeen belang van de betrokken sector zijn*

De uitkoop zal de gehele sector ten goede komen.

b) *De begunstigde moet een voldoende grote tegenprestatie leveren*

De Nederlandse autoriteiten hebben bevestigd dat de runderslachtcapaciteit van het failliete bedrijf met de opbrengst van de parafiscale heffing volledig zal worden stopgezet. De Nederlandse autoriteiten verklaren dat er contractuele regelingen zijn getroffen met de huidige eigenaar van het bedrijf (een bank).

c) *Het moet worden uitgesloten dat de steun dient als reddings- en herstructureringssteun*

De Nederlandse autoriteiten hebben hun voor de bestaande regeling gegeven garanties opnieuw bevestigd:

- 1) De betrokken gelden zullen in geen geval worden toegewezen op basis van vroegere of huidige bedrijfsmoeilijkheden van de begunstigden.
- 2) Bij de berekening van de betalingen aan de begunstigden zal uitsluitend rekening worden gehouden met de gevolgen van de opgelegde capaciteitsinkrimpingen voor de begunstigden, uitgedrukt in:
  - a) gederfde netto-inkomsten en/of
  - b) veroorzaakte sociale kosten en/of
  - c) vermindering van de kapitaalwaarde.

De Nederlandse autoriteiten hebben bevestigd dat er geen sprake is van een keuze van een specifiek bedrijf voor de uitkoop van slachtcapaciteit. Er wordt gebruik gemaakt van de gelegenheid die zich voordoet om tegen relatief lage kosten de capaciteit te verminderen. De technische capaciteit van het failliete bedrijf is nog steeds beschikbaar voor de markt. Het gevaar bestaat dat deze capaciteit wordt uitgekocht tegen een prijs die ver beneden de reële waarde ligt en dat de locatie opnieuw operationeel wordt.

d) *Overcompensatie van kapitaalverlies en verliezen door toekomstige inkomstenderving moet worden uitgesloten*

De Nederlandse autoriteiten hebben verzekerd dat overcompensatie van de kosten die verbonden zijn aan de capaciteitsinkrimping zoals hierboven vastgesteld kan worden uitgesloten. De compensatie voor capaciteitsinkrimping bedraagt [...] NLG. Daarvan is [...] NLG de compensatie van de waardevermindering van gebouwen en inventaris als gevolg van de opgelegde beperkingen op grond waarvan gebruik voor het oorspronkelijke doel (slachterij/uitsnijderij) voor een periode van 30 jaar is uitgesloten. Voorts is een bedrag van [...] NLG bestemd voor afvloeiingsregelingen voor de ca. 200 werknemers van het uitgekochte bedrijf. Dit bedrag wordt rechtstreeks aan deze werknemers betaald.

[...] NLG is weinig in vergelijking met eerdere uitkopen van „going concerns”.

## 2. Beoordeling

De rechtstreekse betaling van een bedrag van [...] NLG aan de werknemers van het uitgekochte bedrijf kan een staatssteun zijn indien deze kosten normaal door de uitgekochte failliete onderneming zouden moeten gedragen worden. In dit verband hebben de Nederlandse autoriteiten verklaard dat de gelden onder meer aangewend worden voor een aanvulling op werkloosheidsuitkering. De Nederlandse autoriteiten worden aangevend bijkomende informatie te verstrekken over de aard van deze sociale kosten teneinde de Commissie toe te laten om te bepalen of deze kosten al dan niet staatssteun uitmaken.

De uitkering van een bedrag van [...] NLG voor stopzetting van de slachtactiviteit is een vorm van staatssteun in de zin van artikel 87, lid 1. Dit artikel is van toepassing als de maatregelen

de onderneming een economisch voordeel bieden dat ze bij een normale bedrijfsvoering niet zou hebben gehad, de steun wordt toegekend aan bepaalde ondernemingen, het voordeel door een lidstaat of met staatsmiddelen wordt toegekend en de steun het handelsverkeer tussen de lidstaten merkbaar ongunstig kan beïnvloeden. Op het eerste gezicht lijkt aan deze voorwaarden te zijn voldaan. In het kader van de maatregel worden staatsmiddelen toegekend aan één begunstigde in een bepaalde sector (slachtsector), waar producenten concurreren op een internationale markt. Hierbij dient benadrukt te worden dat, hoewel de wijziging van de oorspronkelijke regeling van algemene aard lijkt te zijn (verhoging van parafiscale heffing om productiecapaciteit van failliete onderneming op te kopen), de maatregel in feite specifiek gericht is op het uitkopen van één specifieke onderneming, Wolff Vlees. Zoals hiervoor uiteengezet bij de beoordeling van de oorspronkelijke uitkoopregeling, heeft deze regeling gevolgen op de mededinging. De steun kan dan ook het handelsverkeer tussen de lidstaten ongunstig beïnvloeden.

De wijziging van de algemene regeling moet als een nieuwe steunmaatregel beschouwd worden aangezien de parafiscale heffingen aanzienlijk verhoogd worden en het opkopen beoogt van capaciteit van één specifieke, failliete onderneming (terwijl alle vroegere gevallen „going concerns” betroffen).

Op grond van artikel 87, lid 1, van het Verdrag is staatssteun verboden. Op dit verbod is er evenwel een aantal uitzonderingen. Bijgevolg moet worden nagegaan of de onderhavige steun in aanmerking komt voor één van de uitzonderingen waarin het Verdrag voorziet.

De Commissie heeft twijfels bij de door de Nederlandse autoriteiten verstrekte rechtvaardiging. Afgezien van de sociale component van de steun wordt een bedrag van [...] NLG betaald indien wordt toegezegd de installaties niet langer te gebruiken voor de slacht. Bij de huidige marktsituatie lijkt dit een groot bedrag. Men kan niet uitsluiten dat de capaciteit in elk geval zou opgegeven worden. Zelfs na de uitkoop zal er nog steeds een aanzienlijke overcapaciteit zijn. In een dergelijke oververzadigde markt is het eerder onwaarschijnlijk dat een koper geïnteresseerd zou zijn in het failliete bedrijf, tenzij hiervoor een zeer lage prijs wordt gevraagd. Bovendien kan niet eens worden uitgesloten dat de opgegeven capaciteit zelf helemaal geen waarde meer heeft. Het kan dus zijn dat de steun niet nodig was. In dit verband moet worden benadrukt dat de bij het Verdrag vastgestelde uitzonderingen op het verbod op staatssteun alleen van toepassing zijn indien de Commissie kan aantonen dat de marktkrachten alleen, zonder deze steunmaatregel, de potentiële begunstigde niet zouden hebben aangezet tot adequaat (op het bereiken van één van de doelstellingen van het Verdrag gericht) gedrag.

Ook al zou kunnen worden aangetoond dat de steun noodzakelijk is, dan nog moet worden nagegaan of er geen sprake is van overcompensatie. Vergelijkingen met bedragen die zijn betaald voor de uitkoop van „going concerns” zijn niet direct relevant en sluiten eventuele overcompensatie niet uit. Voorts moet ook worden onderstreept dat niet is aangetoond dat er mogelijke belangstelling was voor de aankoop van het failliete bedrijf. Dergelijke belangstelling zou hebben aangetoond dat de steun noodzakelijk was en zou een maatstaf zijn geweest voor de bepaling van het steunbedrag voor de uitkoop van capaciteit.

Het feit dat het gaat om steun voor het opgeven van capaciteit door een failliet bedrijf doet ten slotte enige twijfel rijzen ten aanzien van de garantie van de Nederlandse autoriteiten dat geen steun wordt verleend op basis van vroegere of huidige bedrijfsmoeilijkheden.

#### IV. BESLUIT

1. Om de hierboven aangegeven redenen betwijfelt de Commissie in dit stadium van de procedure of de steun voor capaciteitsinkrimping in de runderslachtsector en de voorgestelde wijziging van de steunregeling het algemeen belang dienen en derhalve in aanmerking komen voor de uitzondering van artikel 87, lid 3, van het Verdrag.

De Commissie wenst Nederland bijgevolg mee te delen dat zij, na bestudering van de beschikbare gegevens betreffende de betrokken staatssteun, besloten heeft om met betrekking tot de voorgestelde steunmaatregel de procedure van artikel 88, lid 2, van het Verdrag in te leiden.

2. In het licht van het bovenstaande verzoekt de Commissie Nederland om, in het kader van de bij artikel 93, lid 2, van het EG-Verdrag vastgestelde procedure, binnen één maand na de ontvangst van dit schrijven, zijn opmerkingen te maken en alle gegevens te verstrekken die van nut kunnen zijn voor de beoordeling van de steunmaatregel. Zij verzoekt de Nederlandse autoriteiten om onverwijld een kopie van dit schrijven aan de potentiële begunstigen toe te zenden.

De Commissie wil Nederland eraan herinneren dat artikel 88, lid 3, van het EG-Verdrag een opschortende werking heeft en wijst op artikel 14 van Verordening (EG) nr. 659/1999 van de Raad van 22 maart 1999 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 88 van het EG-Verdrag (PB L 83 van 27.3.1999), waarin is meegedeeld dat alle onrechtmatig verleende steun van de begunstigde kan worden teruggevorderd, afhankelijk van de relevante bepalingen van de nationale wetgeving; de rente op de teruggevorderde bedragen wordt berekend op basis van de referentiepercentages die worden gebruikt voor de berekening van het subsidie-equivalent in het kader van de regionale steunmaatregelen en is verschuldigd over de periode vanaf de datum waarop de steun is betaald tot de datum van daadwerkelijke terugbetaling.”.

#### AYUDAS ESTATALES

##### **Invitación a presentar observaciones, en aplicación del apartado 5 del artículo 6 de la Decisión de la Comisión nº 2496/96/CECA sobre la ayuda C 57/99 (ex N 601/98) — Ayuda para la protección del medio ambiente a Sidmar, acero CECA**

(1999/C 280/08)

(Texto pertinente a efectos del EEE)

Por carta de 11 de agosto de 1999, reproducida en la versión lingüística auténtica en las páginas siguientes al presente resumen, la Comisión notificó a Bélgica su decisión de incoar el procedimiento previsto en el apartado 5 del artículo 6 de la Decisión nº 2496/96/CECA en relación con la ayuda antes citada.

Las partes interesadas podrán presentar sus observaciones en un plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del presente resumen y de la carta siguiente, enviándolas a:

Comisión Europea  
Dirección General de Competencia  
Dirección Ayudas Estatales II  
Rue de la Loi/Wetstraat 200  
B-1049 Bruxelles/Brussel  
Fax (32-2) 296 95 79.

Dichas observaciones serán comunicadas a Bélgica. La parte interesada que presente observaciones podrá solicitar por escrito, exponiendo los motivos de su solicitud, que su identidad sea tratada confidencialmente.

#### RESUMEN

Mediante carta con fecha de 21 de octubre de 1998, Bélgica notificó a la Comisión una propuesta de concesión de una ayuda para la protección del medio ambiente a Sidmar, empresa del acero CECA. La ayuda propuesta consiste en una subvención de 102 955 000 francos belgas, lo que representa un 15 % de los costes de inversión que las autoridades flamencas consideran que pueden acogerse a la ayuda para la protec-

ción del medio ambiente. Se solicitó más información mediante cartas de 20 de noviembre de 1998 y de 19 de enero de 1999, recibidas el 12 de enero de 1999 y el 16 de marzo de 1999, respectivamente. Las autoridades belgas enviaron más información mediante carta con fecha de 31 de mayo de 1999 sobre uno de los proyectos, sobre el que los servicios de la Comisión pidieron algunas aclaraciones, mediante carta de 7 de junio de 1999. Dichas aclaraciones de recibieron el 23 de junio de 1999.

### 1. Contención de polvo en la grúa de descarga

Realizando esta inversión, la empresa reducirá el impacto del polvo en las zonas circundantes al descargar los barcos. La legislación no exige dicha acción pero puesto que la mejora conseguida para la protección del medio ambiente es significativa, (de 15 t/año a 2 t/año de polvo) el proyecto puede acogerse a ayudas en virtud de la normativa sobre medio ambiente.

La ayuda propuesta (1,5 millones de francos belgas; 15 % de los costes) está dentro del límite del 30 % de intensidad de la ayuda establecido por la normativa sobre ambiente para casos similares. La inversión no repercute en la producción y todos los costes se refieren únicamente al objetivo de la protección del medio ambiente.

### 2. Tratamiento del filtrado procedente de los altos hornos

Realizando esta inversión, la empresa espera optimizar el funcionamiento de su sistema de purificación del agua. Dado que la empresa cumple ya las normas en cuanto al vertido de aguas residuales al canal incluso sin realizar la inversión, ésta constituye un esfuerzo extra para reducir el impacto negativo sobre el medio ambiente. Puesto que la mejora para la protección del medio ambiente es más que significativa (de 5 t/año a 2 t/año de vertidos de zinc), el proyecto puede acogerse a ayudas en virtud de la normativa sobre medio ambiente.

La ayuda propuesta (4,05 millones de francos belgas; 15 % de los costes) está dentro del límite del 30 % de intensidad de la ayuda establecido por la normativa sobre medio ambiente. La inversión no repercute en la producción y todos los costes se refieren únicamente al objetivo de la protección del medio ambiente.

### 3. Ajustes del alto horno nº 4

Esta inversión cubre la sustitución del filtro actual, la construcción de un ventilador de extracción más potente, la sustitución de la actual chimenea y la construcción de una chimenea de emergencia. El porcentaje actual de emisión de cloro es de aproximadamente 25 mg/Nm<sup>3</sup>. A partir del 1 de enero de 1999 la norma será de 5 mg/Nm<sup>3</sup>. El objetivo de la empresa al realizar esta inversión es purificar los gases de combustión para adaptarse, e incluso mejorar, el nivel exigido por la ley a partir del 1 de enero de 1999, con una emisión de 3 mg Cl/Nm<sup>3</sup>. Por lo que se refiere al ácido clorhídrico, el porcentaje actual de emisión es de aproximadamente 50 mg/Nm<sup>3</sup> y a partir del 1 de enero de 1999 la nueva norma será de 30 mg ClH/Nm<sup>3</sup>. Después de la inversión, el porcentaje de emisión será de sólo 15 mg/Nm<sup>3</sup>.

La ayuda propuesta (3,1 millones de francos belgas; 5,3 % de los costes) está dentro del límite del 15 % de intensidad de la ayuda establecido por la normativa sobre medio ambiente para ayudar a las empresas a adaptarse a las nuevas normas. La inversión no repercute en la producción y todos los costes se refieren únicamente al objetivo de la protección del medio ambiente.

### 4. Optimización de las canalizaciones industriales

El objetivo de la empresa al realizar esta inversión es mejorar aún más la reutilización de sus aguas residuales reduciendo así su consumo anual de agua en 9 millones m<sup>3</sup> (su consumo

actual anual es de 35 millones m<sup>3</sup>). La inversión cubre la construcción de una red adicional de tuberías y la colocación de otras dos bombas. Las tuberías adicionales se necesitan para devolver las aguas residuales purificadas al tren de laminación en frío y transportar las aguas residuales de la planta de coque al estanque de residuos del tren de laminación en caliente.

Una vez realizada la inversión, el contenido de contaminantes en el agua será el mismo pero la reducción de volumen del agua reducirá el vertido absoluto de contaminantes. El vertido bruto de DQO bajará de 1 300 toneladas a 1 000 toneladas al año. El vertido de hidrocarburos aromáticos policíclicos bajará de 5 kg al año a 4 kg al año y el vertido de metales pesados también disminuirá proporcionalmente. Además, la cantidad de lodo de depuración, que hay que extraer mediante un procesador de lodos adecuado para luego verterlo, también se reducirá en 200 toneladas al año.

La ayuda propuesta (11,7 millones de francos belgas; 15 % de los costes) está dentro del límite del 30 % de intensidad de la ayuda establecido por la normativa sobre medio ambiente. La inversión no repercute en la producción y todos los costes se refieren únicamente al objetivo de la protección del medio ambiente.

### 5. Mayor contención del polvo al cargar altos hornos

El objetivo de esta inversión es reducir las emisiones de polvo al cargar los altos hornos. Antes de realizar la inversión ya existe un filtro y un sistema de ventilación, con capacidad de 140 000 Nm<sup>3</sup> a la hora. Además de este sistema, se construirá otro complementario con capacidad para 100 000 Nm<sup>3</sup> a la hora. Tras ser recogido y purificado, el gas residual se vierte a través de una chimenea con un flujo de salida de 10 000 Nm<sup>3</sup>/h. Después de ser purificado, el polvo residual no contendrá más de 10 mg/Nm<sup>3</sup>, lo que equivale a la emisión de polvo residual de menos de una tonelada al año. Compárese con las 30 toneladas al año, que es la emisión de polvo difuso actual.

Al igual que el proyecto 1, este proyecto no es legalmente vinculante pero también forma parte del acuerdo celebrado con las autoridades para reducir las emisiones de polvo difuso. La ayuda propuesta (4,12 millones de francos belgas; 15 % de los costes) está dentro del límite del 30 % de intensidad de la ayuda establecido por la normativa sobre medio ambiente. La inversión no repercute en la producción y todos los costes se refieren únicamente al objetivo de la protección del medio ambiente.

### 6. Construcción de un refrigerador circular para la planta de sinterización 2

#### 6.1. Electrofiltro

Realizando esta inversión la empresa espera reducir las emisiones de polvo procedente del horno de sinterización. Actualmente, la emisión de polvo es de 151 kg/Nm<sup>3</sup>. La nueva norma desde enero de 1999 sólo permite 50 mg/Nm<sup>3</sup>.

En el horno de sinterización actual, los aglomerados son enfriados en una cinta transportadora antes de ser destruidos. Al polvo se le inyecta aire refrigerado desde el alto horno y después es extraído del aire frío mediante multiciclones. Con el nuevo equipo, los aglomerados primero se destruyen y luego se



depositan en una especie de disco rotatorio. El aire frío extraído se purifica mediante un electrofiltro, con lo que se reducen las emisiones de polvo a 20 mg/Nm<sup>3</sup>, muy por debajo de la nueva norma.

El electrofiltro es la parte de la inversión directamente relacionada con la reducción de las emisiones de polvo en cumplimiento de la nueva norma legal. La ayuda propuesta (5,4 millones de francos belgas; 3,4 % de los costes) está dentro del límite del 15 % de intensidad de la ayuda establecido por la normativa sobre medio ambiente. La inversión no repercute en la producción y todos los costes se refieren únicamente al objetivo de la protección del medio ambiente.

## 6.2. Ahorro energético

Parte del aire refrigerado se usa entonces como aire precalentado en el horno de sinterización. Otra parte se usa para secar los minerales. Este equipo permite, por consiguiente, ahorrar energía, con lo que ayuda a reducir el impacto sobre el medio ambiente. De hecho, la inversión ahorra energía porque el calor residual se reutiliza y porque la refrigeración de los aglomerados es eficiente desde un punto de vista energético. Puesto que los aglomerados ya han sido destruidos, el aire llega con más facilidad a la banda de sinterizado y la superficie de contacto entre los aglomerados y el aire refrigerado es mayor, por lo que la transmisión de calor es más eficaz. Como se necesita menos energía para la refrigeración puede reducirse la potencia instalada del ventilador de refrigeración a 2 MW (actualmente es de 5,6 MW).

Esta parte de la inversión tiene un coste de 582 millones de francos belgas. Las autoridades belgas piensan conceder una subvención de 73,44 millones de francos belgas, lo que corresponde al 15 % del coste de la inversión que consideran que puede acogerse a la ayuda.

Aunque el período de depreciación de esta inversión es de 10 años, las autoridades belgas sólo quieren deducir el ahorro de 2 años del coste de la inversión para calcular los costes que pueden acogerse a ayudas para la protección del medio ambiente. El motivo es que el Gobierno flamenco considera que las inversiones con una vida inferior o igual a dos años están justificadas económicamente, por lo que no pueden recibir ayudas para la protección del medio ambiente. Si la inversión cuenta claramente con elementos medioambientales y un período de amortización que supere los dos años, el Gobierno flamenco considera que la empresa no lo llevará necesariamente a cabo. Por consiguiente, para incentivar a las empresas a realizar este tipo de proyectos, las inversiones con una vida superior a 2 años pueden solicitar ayuda para la protección del medio ambiente y, para distinguir entre la parte puramente económica de una inversión y la inversión medioambiental, se deduce el ahorro durante dos años.

En su última carta, las autoridades belgas añaden que, durante el período de 10 años, la empresa espera un ahorro energético de hasta 510 075 887 de francos belgas pero que, en ese mismo período, tendrá unos gastos extra de 485 533 829 de francos belgas, incluyendo tipos de interés (71 494 734 de francos belgas, costes financieros (173 399 095 de francos belgas) y gastos de funcionamiento (188 000 000 de francos belgas). Durante un período de 10 años, estos costes adicionales deberán compensarse con el ahorro de costes energéticos, generado por la nueva inversión, lo que quiere decir que el ahorro neto de la empresa será sólo de 24 542 000 francos belgas.

La Comisión considera que todos los proyectos sirven a los objetivos de protección del medio ambiente. Exceptuando la inversión para ahorro energético del proyecto 6, se cumplen

todas las condiciones fijadas en la normativa sobre medio ambiente y en las Directrices sobre ayudas a la siderurgia. En concreto, por lo que se refiere a los cinco primeros proyectos, la intensidad de la ayuda sigue estando dentro de los límites permitidos, todos los costes se refieren a la protección del medio ambiente y los niveles de contaminación se reducen considerablemente.

Sin embargo, en cuanto a la inversión en el proyecto 6, la Comisión considera que la ayuda notificada excede los límites permitidos. Eso es debido a que el criterio de las autoridades belgas a la hora de considerar qué costes pueden solicitar ayuda es más amplio de los que autoriza la normativa comunitaria, que exige que se deduzca de los costes del proyecto cualquier ventaja en la producción que consiga la empresa con la inversión. Bélgica propone deducir únicamente el ahorro realizado durante dos años.

La Comisión considera además que las normas que exigen deducir de los costes cualquier ventaja no se aplican únicamente a los ahorros netos, ya que deberían considerarse como gastos subvencionables las cargas financieras adicionales y los gastos de funcionamiento que causará a la empresa esta inversión.

„De Commissie wenst België ervan in kennis te stellen dat zij, na onderzoek van de door uw autoriteiten met betrekking tot de genoemde steunmaatregel verstrekte informatie, besloten heeft de procedure van artikel 6, lid 5, van Beschikking nr. 2496/96/EGKS van de Commissie van 18 december 1996<sup>(1)</sup> (hierna „de staalsteuncode”) in te leiden.

Bij brief van 21 oktober 1998 welke bij de Commissie op 3 november 1998 werd ingeschreven, stelde België, via zijn vertegenwoordiging bij de Europese Unie, de Commissie overeenkomstig artikel 6, lid 3, van de staalsteuncode, ervan in kennis dat het voornemens was milieusteun te verlenen aan Sidmar, een EGKS-staalbedrijf.

Het steunvoorstel bestaat uit een subsidie van 102 955 000 BEF die 15 % van de investeringskosten vertegenwoordigt welke volgens de Vlaamse autoriteiten in aanmerking zouden komen voor steun ten behoeve van milieubescherming.

Bij brieven van 20 november 1998 en 19 januari 1999 werd om bijkomende gegevens verzocht. Die gegevens bereikten de Commissie respectievelijk op 12 januari 1999 en 16 maart 1999.

Bij brief van 31 mei 1999 deden de Belgische autoriteiten bijkomende informatie toekomen met betrekking tot één van de projecten waarover de Commissie bij schrijven van 7 juni 1999 om toelichtingen had verzocht. De toelichtingen zijn bij de Commissie binnengekomen op 23 juni 1999.

## Rechtsgrondslag

In artikel 3 van de staalsteuncode is bepaald dat staalbedrijven voor steun in aanmerking kunnen komen met betrekking tot investeringen die bijdragen aan een hogere milieubescherming. De regels en voorwaarden voor het verlenen van milieusteun zijn uiteengezet in de bijlage bij de staalsteuncode en de communautaire kaderregeling inzake staatssteun ten behoeve van het milieu<sup>(2)</sup> (hierna „de milieukaderregeling”).

<sup>(1)</sup> PB L 338 van 28.12.1996, blz. 42.

<sup>(2)</sup> PB C 72 van 10.3.1994, blz. 3.

Volgens deze voorschriften is steun voor investeringen die erop gericht zijn te voldoen aan nieuwe verplichte normen, toelaatbaar tot een niveau van 15 % bruto van de in aanmerking komende kosten terwijl steun voor investeringen die gericht zijn op een beduidend hoger niveau van bescherming van het milieu dan bij de verplichte normen is vereist, kan worden toegestaan tot maximaal 30 % bruto van de in aanmerking komende kosten (punten A en B van punt 3.2 van de milieukaderregeling). De in aanmerking komende kosten dienen uitsluitend betrekking te hebben op de bescherming van het leefmilieu.

### Investerings en beoordeling

Sidmar is een te Gent gevestigde particuliere onderneming die voornamelijk in handen is van Arbed SA, Luxemburg. De onderneming produceert verschillende EGKS-staalproducten, onder meer warm- en koudgewalste breedband en plaat met of zonder oppervlaktebekleding. In 1997 produceerde zij 4 137 000 ton vloeibaar staal en haalde zij een omzet van 55 814 miljoen BEF. Op 31 december 1997 had zij 6 005 personen in dienst.

De investeringen waarvoor de steun is bedoeld, beogen een betere bescherming van het milieu tegen lucht-, water- en bodemverontreiniging. De nieuwe niveaus welke zullen worden bereikt, gaan verder dan de wettelijke normen.

De installaties van de onderneming dateren van 1966, 1967 en 1972. De nieuwe investeringen hebben betrekking op aanpassingen van deze installaties om te voldoen aan de nieuwe normen of om die normen aanmerkelijk te overtreffen.

De totale investeringskosten bedragen 953 500 000 BEF en zijn als volgt uitgesplitst:

(BEF)

Stofcaptatie toeslagstoffenloskraan	10 000 000
Behandelen waswater hoogovens	27 000 000
Aanpassen roostoven nr. 4	59 000 000
Optimalisatie industriële rioleringen	78 000 000
Verbeteren stofcaptatie laadinrichting hoogovens	27 500 000
Bouwen rondkoeler sinterfabriek 2	<u>752 000 000</u>
Totaal	953 500 000

De huidige investeringen zijn geen overlapping van maar een aanvulling bij eerdere investeringen welke de onderneming in haar installaties heeft verricht teneinde de fabriek aan te passen aan de nieuwe milieuwetgeving, Vlare II.

#### 1. Stofcaptatie toeslagstoffenloskraan

Investeringskosten: 10 000 000 BEF

Steun

Bedrag: 1 500 000 BEF

Intensiteit: 15 %

Met deze investering wil de firma de stofhinder voor de omgeving bij het lossen van schepen verminderen. Deze investering behelst geen overlapping van maar eerder een aanvulling bij eerdere investeringen met dezelfde milieudoelstelling aangezien zij betrekking heeft op installaties op een andere locatie in het bedrijf. De stofhinder ontstaat voornamelijk bij het lossen van kalk inzonderheid op droge, winterige dagen. De diffuse stofemissie kan worden geraamd op ongeveer 15 ton per jaar en deze investering moet die emissie kunnen beperken tot ongeveer 2 ton per jaar.

Het lossen van schepen gebeurt met een kraan met grijper. De lading van de grijper wordt in een bunker gestort en vervolgens met transportbanden naar het grondstoffenpark gevoerd. Bovenop de bunker worden een reeks sproeiers geplaatst. Door het stof te besproeien gaat het neerslaan zodat het niet meer in de omgeving terecht komt.

De milieuvergunning bevat een verplichting om onderzoek te doen naar de diffuse stofemissie van de fabriek en voorstellen ter beperking van de emissies in te dienen. Sidmar heeft aan die vereiste voldaan en ingevolge dit onderzoek zijn aan de vergunningsverlenende autoriteiten een aantal voorstellen gedaan om het stof uit puntbronnen te beperken. Deze voorstellen houden geen wettelijke verplichting in krachtens het Belgische recht maar aangezien de bereikte verbetering bij de bescherming van het milieu zeer aanzienlijk is (van 15 ton/jaar tot 2 ton/jaar stofemissie), komt het project in aanmerking voor steun krachtens de milieukaderregeling.

De voorgestelde steun (15 % van de kosten) blijft binnen de 30 % steunintensiteit welke krachtens de milieukaderregeling in dergelijke gevallen is toegestaan. De investering heeft geen gevolgen voor de productie en alle kosten hebben uitsluitend betrekking op de milieudoelstelling.

#### 2. Behandelen waswater hoogovens

Investeringskosten: 27 000 000 BEF

Steun

Bedrag: 4 050 000 BEF

Intensiteit: 15 %

De onderneming wil met deze investering de werking van haar bestaande waterzuivering optimaliseren. Door deze optimalisatie streeft het bedrijf ernaar zijn zinklozing op jaarbasis van 5 ton zink terug te brengen tot 2 ton per jaar.

De investering omvat het installeren van een continu meetnet (momenteel wordt enkel discontinu gemeten met een frequentie van twee dagmonsters per week) met een terugkoppeling naar de bezinkingsinstallatie.

Aangezien de onderneming vóór het doorvoeren van deze investering voldeed aan de normen voor lozing van afvalwater in het kanaal, vormt deze investering een extra inspanning op het vlak van de vermindering van de milieubelastende effecten. Aangezien de verbetering van de milieubescherming aanzienlijk is (van 5 ton/jaar tot 2 ton/jaar zinklozing), komt het project in aanmerking voor steun krachtens de milieukaderregeling.

De voorgestelde steun (15 % van de kosten) blijft binnen de 30 % steunintensiteit welke is vastgesteld in de milieukaderregeling. De investering heeft geen gevolgen voor de productie en alle kosten hebben uitsluitend betrekking op de milieudoelstelling.

### 3. Aanpassen roostoven nr. 4

Investeringskosten: 59 000 000 BEF

waarvan:

Dubbele schouw: 21 000 000 BEF

Wasrecuperator: 20 000 000 BEF

Steun

Bedrag: 3 141 600 BEF

Intensiteit: 5,3 %

De investering betreft de vervanging van de huidige filter, de bouw van een zwaardere afzuigventilator, het vervangen van de bestaande schoorsteen en het plaatsen van een noodschouw.

In het staalproductieproces wordt ijzer geroost om de zwavel en het koolzuurgas eruit te halen. Dit gebeurt door de erts in een oven aan hitte en lucht bloot te stellen waardoor oxidatie plaatsvindt en de vluchtige stoffen ontsnappen. De ontstane rookgassen bevatten stof, chloorgas en chloorwaterstofgas en moeten worden gezuiverd.

De huidige chloorgasemissie bedraagt ongeveer 25 mg/Nm<sup>3</sup>, terwijl de norm vanaf 1 januari 1999 5 mg/Nm<sup>3</sup> bedraagt. Met deze investering wil de onderneming de afgassen beter gaan zuiveren dan hetgeen bij wet vanaf 1 januari 1999 is opgelegd en streeft zij ernaar een emissie te halen van 3 mg Cl/Nm<sup>3</sup>. Voor chloorwaterstofgas bedraagt de huidige emissie ongeveer 50 mg/Nm<sup>3</sup>, terwijl de nieuwe norm per 1 januari 1999 30 mg HCl/Nm<sup>3</sup> bedraagt. Na de investering zal het emissieniveau slechts 15 mg/Nm<sup>3</sup> bedragen.

De voorgestelde steun (5,3 % van de kosten) blijft binnen de 15 % steunintensiteit die krachtens de milieukaderregeling is toegestaan om bedrijven te helpen nieuwe normen na te leven. De investering heeft geen gevolgen voor de productie en alle kosten hebben uitsluitend betrekking op de milieudoelstelling.

### 4. Optimalisatie industriële rioleringen

Investeringskosten: 78 000 000 BEF

waarvan:

Terugvoer rioolwater: 60 000 000 BEF

Steun

Bedrag: 11 700 000 BEF

Intensiteit: 15 %

Met deze investering beoogt de onderneming het hergebruik van haar afvalwater verder te optimaliseren om aldus een jaarlijkse waterbesparing van 9 miljoen m<sup>3</sup> te realiseren (het huidige jaarverbruik bedraagt 35 miljoen m<sup>3</sup>). De investering omvat het leggen van een bijkomend leidingnet en het plaatsen van twee bijkomende pompen. De bijkomende leidingen zijn noodzakelijk om het gezuiverd afvalwater terug te voeren naar de koudwalserij en om het afvalwater van de cokesfabriek naar de bezinkput van de warmwalserij te voeren.

Met de vermindering van het waterverbruik beoogt de onderneming geen grondstoffenbesparing maar een beperking van de milieugevolgen van haar activiteiten: het water wordt uit het kanaal opgepompt en daarna terug erin geloosd. De absolute lozing van vervuilende stoffen in het kanaal is het product van het gehalte vervuilende stoffen in het geloosde water vermenigvuldigd met het volume. Na de investering blijft het gehalte aan vervuilende stoffen gelijk maar een vermindering van het volume zal de absolute lozing van vervuilende stoffen beperken. De bruto COD-lozing zal afnemen van 1 300 ton tot 1 000 ton per jaar. De PAK-lozing zal dalen van 5 kg per jaar tot 4 kg per jaar en de lozing van zware metalen zal eveneens op evenredige wijze dalen. Bovendien zal de hoeveelheid zuiveringsslib dat via een erkende slibverwerker moet worden weggewerkt en uiteindelijk worden gestort, eveneens met 200 ton per jaar afnemen.

De voorgenomen steun (15 % van de kosten) blijft binnen de 30 % steunintensiteit welke is toegestaan in de milieukaderregeling. De investering heeft geen gevolgen voor de productie en alle kosten houden uitsluitend verband met de milieudoelstelling.

### 5. Verbetering stofcaptatie laadinrichting hoogovens

Investeringskosten: 27 500 000 BEF

Steun

Bedrag: 4 120 000 BEF

Intensiteit: 15 %

Met deze investering wil het bedrijf de stofemissies rond de laadinrichting van de hoogovens verminderen. Voor de investering beschikte het bedrijf over een afzuiginstallatie en een filter met een capaciteit van 140 000 Nm<sup>3</sup> per uur. Naast de bestaande installatie zal een bijkomende installatie worden gebouwd met een capaciteit van 100 000 Nm<sup>3</sup> per uur. Na captatie en zuivering wordt het afvalgas geloosd via een schouw met een debiet van 10 000 Nm<sup>3</sup>/uur. Na zuivering blijft een stofgehalte van hoogstens 10 mg/Nm<sup>3</sup> over hetgeen overeenkomt met een residuele stofemissie van minder dan 1 ton per jaar. Dit moet worden vergeleken met de huidige diffuse stofemissie van 30 ton per jaar.

Dit project is evenmin als project 1 wettelijk verplicht, maar het maakt deel uit van de overeenkomst welke met de autoriteiten is gesloten om de diffuse stofemissies te beperken. De voorgestelde steun (15 % van de kosten) blijft binnen de 30 % steunintensiteit waarin in de milieukaderregeling is voorzien. De investering heeft geen gevolgen voor de productie en alle kosten houden uitsluitend verband met de milieudoelstelling.

### 6. De bouw van een rondkoeler voor sinterfabriek 2

Investeringskosten: 752 000 000 BEF

waarvan:

1. Filter: 158 000 000 BEF

Steun (3,4 %) 5 427 481 BEF

2. Energiebesparingen: 582 000 000 BEF

Steun 73 011 047 BEF

Totale steun: 78 438 528 BEF

### 1. De elektrofilter

Met deze investering wil de onderneming de stofemissies van de sinteroven verminderen. De stofemissie bedraagt thans 151 mg/Nm<sup>3</sup>, terwijl de nieuwe norm vanaf januari 1999 slechts 50 mg/Nm<sup>3</sup> toelaat. De erts en de cokes worden door een warmtebehandeling aan elkaar geklit tot granulaten. Deze bewerking is noodzakelijk omdat de erts en cokes anders verbrijzeld zouden worden in de hoogoven in plaats van te verbranden en te smelten in welk geval er geen chemische reductie van het ijzererts zou kunnen plaatsvinden.

In de huidige sinteroven worden de sinters op de band afgekoeld voor ze gebroken worden. Het stof wordt met de koele lucht uit de sinteroven meegesleurd en vervolgens door multicyclonen uit de koellucht gehaald. Bij de nieuwe installaties zullen de sinters eerst gebroken worden en daarna op een soort draaiende schijf worden gestort. De afgezogen koellucht wordt door een elektrofilter gezuiverd, zodat de stofemissie beperkt wordt tot 20 mg/Nm<sup>3</sup>, een volume dat duidelijk onder de norm blijft.

De elektrofilter is het onderdeel van de investering dat rechtstreeks verband houdt met de beperking van de stofemissies overeenkomstig de nieuwe wettelijke norm. De voorgestelde steun (3,4 % van de kosten) blijft binnen de 15 % steunintensiteit waarin in de milieukaderregeling is voorzien. De investering heeft geen gevolgen voor de productie en alle kosten houden uitsluitend verband met de milieudoelstelling.

### 2. Energiebesparingen

Een gedeelte van de koellucht wordt gebruikt als voorverwarmde lucht in de sinteroven. Een ander deel wordt aangewend om de erts te drogen. Deze installatie is derhalve energiebesparend en draagt in die zin ook bij tot de vermindering van de milieubelastende gevolgen. De investering is energiebesparend omdat de restwarmte wordt teruggewonnen en omdat de koeling van de sinters energie-efficiënter gebeurt. Aangezien de sinters reeds gebroken zijn, kan de lucht beter door het sinterbed stromen en is het contactoppervlak sinterkoellucht groter, zodat de warmteoverdracht beter is. Door de verminderde energiebehoefte voor koeling kan het geïnstalleerde vermogen van de koelventilatoren tot 2 MW worden verminderd, terwijl het momenteel 5,6 MW bedraagt.

Het lage vermogen zal ook leiden tot minder geluidsoverlast voor de omgeving. De geluidsoverlast zal verder worden beperkt door het aanbrengen van een geluidsomkasting. Dit is een bijkomend gunstig milieueffect van de investering.

Dit gedeelte van de investering dat betrekking heeft op energiebesparingen, kost 582 miljoen BEF. De Belgische autoriteiten zijn voornemens om een subsidie van 15 % toe te kennen voor de investeringskosten die volgens die autoriteiten voor steun in aanmerking komen. Hoewel de afschrijvingsperiode van de investering tien jaar bedraagt, willen de Belgische autoriteiten slechts twee jaar besparingen van de investeringskosten aftrekken bij de berekening van de voor milieusteun in aanmerking komende kosten. De Vlaamse regering is immers van mening dat investeringen met een levensduur van twee jaar of minder economisch verantwoord zijn en derhalve niet voor milieusteun in aanmerking komen. Indien aan een investering manifest milieuaspecten verbonden zijn en de terugbetalingstermijn

ervan meer dan twee jaar bedraagt, acht de Vlaamse regering het niet vanzelfsprekend dat een onderneming een dergelijke investering tot uitvoering zal brengen. Teneinde ondernemingen aan te moedigen om dergelijke projecten tot uitvoering te brengen komen investeringen met een levensduur van meer dan twee jaar in aanmerking voor milieusteun en wordt een besparingsaftrek van twee jaar toegepast teneinde het zuiver economische gedeelte van de investering te scheiden van de milieu-investering.

Volgens de communautaire voorschriften moeten evenwel alle voordelen die een onderneming haalt uit een investering in energiebesparingen, worden afgetrokken van de voor milieusteun in aanmerking komende kosten. Dit kan slechts geschieden wanneer de kostenbesparingen over de volledige economische levensduur van de investering in rekening worden gebracht en niet slechts over twee jaar. Het Belgische voorschrift houdt met deze verplichting geen verband en is eerder erop gericht om investeringen waarvan de tenuitvoerlegging geen stimulans behoeft, van milieusteun uit te sluiten.

In hun laatste brief hebben de Belgische autoriteiten eraan toegevoegd dat de onderneming over de periode van tien jaar energiebesparingen voor een bedrag van 510 075 887 BEF verwacht maar dat zij over dezelfde periode een bijkomend bedrag van 485 533 829 BEF zal uitgeven dat als volgt is uitgesplitst:

Rente	71 494 734 BEF
Financiële lasten	173 399 095 BEF
Exploitatiekosten	188 000 000 BEF

Over een periode van tien jaar zouden die bijkomende kosten de door de nieuwe investering teweeggebrachte besparingen compenseren zodat de onderneming netto slechts 24 542 000 BEF zou besparen.

Het bovenstaande argument volgens hetwelk alleen de netto-besparingen in aanmerking moeten worden genomen rekening houdend met de levensduur van de investering — in casu tien jaar —, is onaanvaardbaar omdat aldus niet alleen steun ten behoeve van de initiële investeringskosten zou worden verleend, maar ook ten behoeve van de exploitatiekosten. De bijkomende kosten die de onderneming wegens de initiële investering beweert te moeten maken, zullen ook worden gemaakt bij milieu-investeringen die de onderneming geen kostenvoordeel opleveren.

De Belgische autoriteiten herhalen evenwel hun aanvankelijke standpunt met betrekking tot het bedrag van de steun en de periode van twee jaar gedurende dewelke zij de verwezenlijkte besparingen aftrekken overeenkomstig de relevante Vlaamse wetsvoorschriften. Zij houden alleen rekening met de initiële investering als in aanmerking komende kosten en trekken de bijkomende exploitatiekosten die de onderneming maakt, niet af van de besparingen.

### Conclusie

De Commissie is van mening dat met alle projecten milieudoelstellingen worden nagestreefd. Met uitzondering van de investering in energiebesparing in project 6, is aan alle voorwaarden van de milieukaderregeling en de staalsteuncode voldaan. Inzonderheid bij de eerste vijf projecten blijft de steunintensiteit onder de toegestane plafonds, hebben alle kosten betrekking op milieubescherming en worden de verontreinigingsniveaus aanzienlijk verlaagd.

Wat de investering in project 6 betreft, is de Commissie evenwel van mening dat de aangemelde steun de toegestane limieten overschrijdt. Dit komt omdat de Belgische autoriteiten voor de in aanmerking komende kosten een bredere basis gebruiken dan is toegestaan door de communautaire voorschriften volgens dewelke alle productiekostenvoordelen die een onderneming uit de investering haalt, moeten worden afgetrokken van de projectkosten. België stelt voor om alleen de besparingen welke gedurende twee jaar worden verwezenlijkt, van de kosten af te trekken.

Volgens punt 2.3 van de milieukaderregeling, wordt steun voor energiebesparing behandeld als steun voor milieudoelinden rekening houdend met de kostenbesparingen die door de investeerder worden gemaakt. Volgens de bijlage bij de staalsteuncode „[zal] enig voordeel met betrekking tot lagere productiekosten dat uit dit aanzienlijk hoger niveau van bescherming van het milieu voortvloeit, [...] in mindering worden gebracht.”

Teneinde alle kostenvoordelen van een investering vast te stellen moet rekening worden gehouden met de volledige levensduur van de investering. Bij ontstentenis van dergelijke informatie kan de afschrijvingsperiode van een dergelijke investering worden gebruikt als een equivalent van de levensduur van de investering. Sinds de huidige kaderregeling milieusteun in voege is heeft de Commissie deze praktijk inzonderheid bij de beoordeling van individuele gevallen toegepast.

In deze zaak hebben de Belgische autoriteiten medegedeeld dat de afschrijvingsperiode/levensduur van de investering tien jaar bedraagt. Indien de te realiseren besparingen slechts gedurende twee jaar zouden worden afgetrokken, zou de onderneming gedurende de resterende acht jaar een kostenvoordeel ontvangen ten aanzien van de gesteunde investering. Dit zou indruisen tegen de voorschriften.

De Belgische regel om de besparingen gedurende twee jaar af te trekken, zoals hierboven beschreven, houdt verband met de noodwendigheid van de steun en betekent niet noodzakelijkerwijze dat de onderneming geen kostenvoordelen uit de investering haalt na het verstrijken van die periode van twee jaar. De in punt 2.3 van de milieukaderregeling uiteengezette communautaire regel kan derhalve niet geacht worden te zijn nageleefd via dit voorschrift dat betrekking heeft op twee jaar. Derhalve lijkt de voorgestelde steun voor dit gedeelte van project 6 niet te voldoen aan de voorwaarden van de milieukaderregeling en de staalsteuncode.

De Commissie is tevens van mening dat, indien bij de principiële aftrek van het kostenvoordeel dat door de onderneming is behaald alleen de nettobesparingen zouden worden afgetrokken, dit zou inhouden dat exploitatiekosten zouden worden aanvaard als in aanmerking komende kosten in tegenstelling tot de praktijk inzake uitsluitende milieuinvesteringen.

## Besluit

In het licht van deze overwegingen nodigt de Commissie overeenkomstig de procedure van artikel 6, lid 5, van de staalsteuncode, België uit haar uiterlijk binnen één maand na de ontvangst van deze brief zijn opmerkingen kenbaar te maken en alle informatie te verstrekken welke voor de beoordeling van de steun dienstig kan zijn. De Commissie verzoekt uw autoriteiten onverwijld een kopie van deze brief te doen toekomen aan de potentiële begunstigde van de steun.

De Commissie herinnert België eraan dat artikel 6, lid 5, van de staalsteuncode een opschortend effect heeft en vestigt uw aandacht op de brief welke op 22 februari 1995 aan alle lidstaten is toegestuurd en waarin is gestipuleerd dat onrechtmatig toegerekende steun van de ontvanger kan worden teruggevorderd, vermeerderd met de rente berekend op basis van de referentierente die gebruikt wordt voor de berekening van het subsidie-equivalent bij regionale steunmaatregelen. Die rente is verschuldigd vanaf de datum waarop de steun werd uitgekeerd tot de datum van de daadwerkelijke terugbetaling.”

«Par la présente, la Commission a l'honneur d'informer la Belgique qu'après avoir examiné les informations fournies par vos autorités sur l'aide citée en objet, elle a décidé d'ouvrir la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 5, de la décision n° 2496/96/CECA de la Commission (ci-après dénommé "le Code des aides à la sidérurgie" (3)).

Par lettre du 21 octobre 1998, enregistrée par la Commission le 3 novembre 1998, la Belgique, par le biais de sa représentation auprès de l'Union européenne, et conformément à l'article 6, paragraphe 3, du Code des aides à la sidérurgie, a notifié à la Commission un projet d'aide pour la protection de l'environnement en faveur de Sidmar, une entreprise sidérurgique CECA.

Le projet vise à accorder une subvention de 102 955 000 BEF, soit 15 % des coûts d'investissement pouvant, selon les autorités flamandes, bénéficier d'aides pour la protection de l'environnement.

Par lettres des 20 novembre 1998 et 19 janvier 1999, la Commission a demandé des renseignements complémentaires, qu'elle a reçus les 12 janvier et 16 mars 1999 respectivement.

Par lettre du 31 mai 1999, les autorités belges ont transmis des renseignements complémentaires sur un des projets. Les services de la Commission ont alors demandé quelques éclaircissements à ce sujet, par lettre du 7 juin 1999, qui leur sont parvenus le 23 juin 1999.

## Base juridique

L'article 3 du Code des aides à la sidérurgie prévoit que des aides peuvent être attribuées aux entreprises sidérurgiques pour des investissements qui contribuent à améliorer la protection de l'environnement. Les règles et les critères d'application des aides pour la protection de l'environnement sont exposés à l'annexe du Code des aides à la sidérurgie et dans l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (4) (ci-après dénommé "encadrement des aides pour la protection de l'environnement").

(3) JO L 338 du 28.12.1996, p. 42.

(4) JO C 72 du 10.3.1994, p. 3.

Ces règles disposent que les aides à l'investissement destinées à aider les entreprises à s'adapter aux nouvelles normes obligatoires peuvent être autorisées à concurrence d'un niveau maximal de 15 % brut des coûts admissibles, tandis que les aides aux investissements permettant d'atteindre des niveaux de protection de l'environnement très nettement supérieurs à ceux imposés par les normes obligatoires peuvent être autorisées à concurrence d'un niveau maximal de 30 % brut des coûts d'investissement admissibles (points A et B 3.2 de l'encadrement des aides pour la protection de l'environnement). Les coûts admissibles doivent se rapporter à des mesures exclusivement liées à la protection de l'environnement.

### Investissements et appréciation

Sidmar est une société privée, située à Gand, dans laquelle Arbed SA, Luxembourg, est majoritaire. Elle fabrique plusieurs produits sidérurgiques CECA, tels que des coils et des tôles laminés à chaud et à froid, revêtus et non revêtus. En 1997, sa production d'acier liquide atteignait 4 137 000 tonnes et son chiffre d'affaires 55 814 millions de BEF. Au 31 décembre 1997, elle employait 6 005 personnes.

Les investissements que l'entreprise prévoit de subventionner visent à améliorer la protection de l'environnement en luttant contre la pollution de l'air, de l'eau et du sol. Les niveaux ainsi obtenus iront même au-delà des normes prescrites par la loi.

Les installations de la société datent des années 1966, 1967 et 1972. Les investissements prévus consistent à adapter ces installations, afin de satisfaire aux nouvelles normes ou d'atteindre des niveaux nettement supérieurs à ceux qui sont imposés par les normes obligatoires.

Le coût total des investissements s'élève à 953 500 000 BEF, répartis comme suit:

(BEF)

Captage des poussières à l'endroit des grues de déchargement	10 000 000
Traitement des eaux de lavage des hauts fourneaux	27 000 000
Adaptation du four de grillage n° 4	59 000 000
Optimisation des conduites d'évacuation des eaux usées	78 000 000
Amélioration du captage des poussières aux installations de chargement des hauts fourneaux	27 500 000
Construction d'un refroidisseur circulaire pour l'installation de frittage n° 2	<u>752 000 000</u>
Total	953 500 000

Sans faire double emploi avec des investissements antérieurs, les projets actuels de l'entreprise les complètent et visent également à mettre l'usine en conformité avec la nouvelle loi sur l'environnement, intitulée Vlarem II.

### 1. Captage des poussières à l'endroit des grues de déchargement

Coût de l'investissement: 10 000 000 de BEF

Aide

Montant 1 500 000 de BEF

Intensité: 15 %.

Cet investissement permettra à l'entreprise de diminuer l'incidence de la poussière aux abords des zones des déchargement des navires. Il ne fait pas double emploi avec des investissements antérieurs visant le même objectif écologique, mais les complète, puisque l'installation en cause est située dans un autre lieu géographique au sein de l'entreprise. La pollution due à la poussière se produit surtout lors du déchargement du calcaire, notamment lorsque le temps est sec et qu'il y a du vent. D'après des estimations, les émissions de poussières diffuses s'élèvent à environ 15 tonnes par an, que cet investissement pourrait permettre de ramener à quelque 2 tonnes par an.

Les navires sont déchargés au moyen d'une grue équipée d'une benne. Le contenu de la benne est déposé dans une soute, puis acheminé par bande transporteuse à l'entrepôt des matières premières. Une rangée de gicleurs sera fixée en haut de la soute. L'eau aspergera la poussière, qui se déposera sur le sol au lieu de se disperser dans les environs.

Pour obtenir le permis d'environnement, l'entreprise doit étudier la question des émissions de poussières diffuses et présenter des propositions pour les réduire. Sidmar s'est acquittée de cette obligation et a soumis un certain nombre de mesures aux autorités compétentes, en vue de diminuer la poussière à des sources ponctuelles. D'après le droit belge, ces propositions de mesures ne sont pas juridiquement contraignantes, mais l'amélioration obtenue du point de vue de la protection de l'environnement étant considérable (réduction de 15 t/an à 2 t/an des émissions de poussière), le projet remplit les conditions pour pouvoir bénéficier des aides prévues par l'encadrement des aides pour la protection de l'environnement.

L'aide envisagée (15 % des coûts) est nettement inférieure au plafond autorisé (30 %) dans ces cas-là par cet encadrement. L'investissement n'a aucune incidence sur la production et les coûts se rapportent en totalité à des mesures exclusivement liées à la protection de l'environnement.

### 2. Traitement des eaux de lavage des hauts fourneaux

Coût de l'investissement: 27 000 000 de BEF

Aide

Montant: 4 050 000 BEF

Intensité: 15 %

La société espère, par cet investissement, optimiser le fonctionnement de son système d'épuration des eaux et prévoit de ramener ainsi ses rejets de zinc de 5 tonnes par an à 2 tonnes.

L'investissement comprend la mise en place d'un système de surveillance permanent (à l'heure actuelle, cette surveillance est assurée d'une manière discontinue, soit avec une fréquence de deux jours par semaine), avec rétroaction sur l'unité de sédimentation.

Avant même de procéder à cet investissement, la société respectait les conditions fixées en matière de rejet des eaux usées dans le canal, de sorte que cette mesure constitue un effort supplémentaire en vue de réduire les nuisances pour l'environnement. Étant donné que l'amélioration obtenue au niveau de la protection de l'environnement est très nette (de 5 t/an à 2 t/an pour les rejets de zinc), le projet remplit les conditions requises pour bénéficier des aides prévues par l'encadrement sur les aides pour la protection de l'environnement.

L'aide envisagée (15 % des coûts) est nettement inférieure au plafond autorisé (30 %) par cet encadrement. L'investissement n'a aucune incidence sur la production et les coûts se rapportent en totalité à des mesures exclusivement liées à la protection de l'environnement.

### 3. Adaptations du four de grillage n° 4

Coût de l'investissement: 59 000 000 de BEF

dont:

Double cheminée: 21 000 000 de BEF

Épurateur par lavage: 20 000 000 de BEF

Aide

Montant: 3 141 600 BEF

Intensité: 5,3 %.

Cet investissement comprend le remplacement du filtre existant, la construction d'un ventilateur d'extraction à rendement plus élevé, le remplacement de la cheminée existante et l'édification d'une cheminée de secours.

Pour produire de l'acier, le fer est fondu afin d'en extraire le soufre et le gaz carbonique. À cette fin, les minerais sont exposés à la chaleur et à l'air dans un four, ce qui permet à l'oxydation de se produire et aux vapeurs de s'échapper. Les gaz de combustion qui s'en dégagent contiennent de la poussière, du chlore gazeux et du chlorure d'hydrogène et doivent être purifiés.

Actuellement, le taux d'émission de chlore atteint 25 mg/Nm<sup>3</sup>, alors qu'à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1999, la norme sera fixée à 5 mg/Nm<sup>3</sup>. Pour l'entreprise, il s'agit, grâce à cet investissement, de purifier ses gaz de combustion pour répondre à la norme prescrite par la loi à compter du 1<sup>er</sup> janvier 1999, voire aller au-delà et ramener son taux d'émission à 3 mg Cl/Nm<sup>3</sup>. En ce qui concerne le chlorure d'hydrogène, le taux d'émission se situe actuellement autour de 50 mg/Nm<sup>3</sup>, alors qu'à partir du 1<sup>er</sup> janvier 1999, la nouvelle norme sera fixée à 30 mg HCl/Nm<sup>3</sup>. Une fois l'investissement achevé, ce taux d'émission sera ramené à seulement 15 mg/Nm<sup>3</sup> t.

L'aide envisagée (5,3 % des coûts) est nettement inférieure au plafond autorisé (15 %) par l'encadrement des aides pour la protection de l'environnement afin d'aider les entreprises à satisfaire aux nouvelles normes. L'investissement n'a aucune incidence sur la production, et les coûts se rapportent en totalité à des mesures exclusivement liées à la protection de l'environnement.

### 4. Optimisation des conduites d'évacuation des eaux usées

Coût de l'investissement: 78 000 000 de BEF

dont:

Réutilisation des eaux usées: 60 000 000 de BEF

Aide

Montant: 11 700 000 BEF

Intensité: 15 %.

En menant à bien cet investissement, la société vise à optimiser davantage la réutilisation de ses eaux usées et, partant, à réduire de 9 millions de m<sup>3</sup> sa consommation d'eau annuelle (qui atteint actuellement 35 millions de m<sup>3</sup>). Il comprend la construction d'un réseau supplémentaire de canalisations et l'installation de deux nouvelles pompes. Ces canalisations sont nécessaires pour renvoyer les eaux usées, après épuration, vers l'installation de laminage à froid et transporter les eaux usées de l'installation de cokéfaction au bassin à eaux usées du laminoir à chaud.

Si l'entreprise réduit sa consommation d'eau, ce n'est pas pour économiser des ressources, mais pour diminuer les nuisances que ses activités occasionnent pour l'environnement: l'eau est pompée du canal et y est ensuite rejetée. En valeur absolue, le rejet des polluants dans le canal est égal à la teneur de l'eau rejetée en polluants multipliée par le volume. Une fois l'investissement achevé, la teneur en substances polluantes restera la même, mais du fait de sa baisse en volume, le rejet des polluants sera moindre en valeur absolue. La pollution sous l'angle de la DCO (demande chimique en oxygène) brute tombera de 1 300 tonnes à 1 000 tonnes par an. Les rejets d'HAP seront ramenés de 5 kg par an à 4 kg par an et le déversement de métaux lourds diminuera également en proportion. En outre, la quantité de boues d'épuration éliminées au moyen d'une installation adéquate de traitement des eaux usées et finalement mises en décharge sera également réduite de 200 tonnes par an.

L'aide envisagée (15 % des coûts) est nettement inférieure au plafond autorisé (30 %) par l'encadrement des aides pour la protection de l'environnement. L'investissement n'a aucune incidence sur la production et les coûts se rapportent en totalité à des mesures exclusivement liées à la protection de l'environnement.

### 5. Amélioration du captage des poussières aux installations de chargement des hauts fourneaux

Coût de l'investissement: 27 500 000 BEF

Aide

Montant: 4 120 000 BEF

Intensité: 15 %.

Cet investissement vise à diminuer les émissions de poussière lors du chargement des hauts fourneaux. L'installation actuelle comprend déjà un système de ventilation et un filtre, dont la capacité atteint 140 000 Nm<sup>3</sup> par heure. Elle sera complétée par la construction d'un autre dispositif d'une capacité de 10 000 Nm<sup>3</sup> par heure. Une fois captés et purifiés, les gaz usés sont rejetés par une cheminée dont le débit est de 10 000 Nm<sup>3</sup>/h. Après purification, la teneur en poussière résiduelle ne dépassera pas 10 mg/Nm<sup>2</sup>, ce qui équivaut à une émission de poussière résiduelle inférieure à 1 tonne par an, contre 30 tonnes par an actuellement.

À l'instar du projet 1, ce projet n'est pas juridiquement contraignant, mais il fait aussi partie de l'accord conclu avec les autorités en vue de diminuer les émissions de poussières diffuses. L'aide envisagée (15 % des coûts) est nettement inférieure au plafond autorisé (30 %) par l'encadrement des aides pour la protection de l'environnement. L'investissement n'a aucune incidence sur la production et les coûts se rapportent en totalité à des mesures exclusivement liées à la protection de l'environnement.

#### 6. Construction d'un refroidisseur circulaire pour l'installation de frittage n° 2

Coût de l'investissement: 752 000 000 de BEF

dont:

1. Filtre: 158 000 000 de BEF

Aide (3,4 %): 5 427 481 BEF

2. Économies d'énergie: 582 000 000 de BEF

Aide: 73 011 047 BEF.

Aide totale: 78 438 528 BEF

##### 1. Électrofiltre

La société espère, par cet investissement, réduire les émissions de poussières du four de frittage. Actuellement, le taux d'émission est de 151 mg/Nm<sup>3</sup>, alors qu'à compter de janvier 1999, le plafond autorisé sera ramené à 50 mg/Nm<sup>3</sup> seulement. Les minerais et les coques sont fondus ensemble pour former des granulés, par le biais d'un traitement thermique dans le four de frittage. Ce traitement est nécessaire, faute de quoi, au lieu de brûler et de fondre, les minerais et les coques se trouvant dans le haut fourneau seraient pulvérisés, ce qui empêcherait la réduction chimique du fer de se produire.

Dans le four de frittage actuel, les agglomérés sont refroidis sur une bande transporteuse avant d'être cassés. La poussière est évacuée du haut fourneau avec l'air de refroidissement, d'où elle est ensuite extraite par des multicyclones. Dans la nouvelle installation, les agglomérés sont tout d'abord cassés, puis déposés sur une sorte de disque rotatif. L'air de refroidissement extrait est purifié par un électrofiltre, ce qui permet de ramener les émissions de poussière à 20 mg/Nm<sup>3</sup>, niveau nettement inférieur au plafond autorisé par la nouvelle norme.

L'électrofiltre électrique fait partie de l'investissement qui vise directement à réduire les émissions de poussière, conformément à la nouvelle norme fixée par la loi. L'aide envisagée (3,4 % du coût) est nettement inférieure au plafond autorisé (15 %) par l'encadrement des aides pour la protection de l'environnement. L'investissement n'a aucune incidence sur la production et les coûts se rapportent en totalité à des mesures exclusivement liées à la protection de l'environnement.

##### 2. Économies d'énergie

Une partie de l'air refroidi est ensuite utilisée dans le four de frittage comme air préchauffé, une autre partie sert à sécher les minerais. Cette installation permet par conséquent d'économiser l'énergie et contribue de même à diminuer les nuisances pour l'environnement. En effet, la chaleur résiduelle est réutilisée et les agglomérés sont refroidis d'une manière économe en énergie. Comme les agglomérés sont déjà été cassés, l'air peut atteindre plus facilement le lit d'agglomérés et la surface de contact entre eux et l'air de refroidissement est plus grande, ce qui améliore la transmission de la chaleur. Le processus de refroidissement consommant moins d'énergie, la puissance installée du ventilateur de refroidissement pourra être ramenée à 2 MW contre 5,6 MW actuellement.

Cette puissance moindre permettra également de réduire les nuisances sonores pour l'environnement. Des absorbeurs de bruit seront en outre installés, autre effet positif de cet investissement sur l'environnement.

Cette partie de l'investissement concernant les économies d'énergie coûte 582 millions de BEF. Les autorités belges envisagent de subventionner 15 % du coût de l'investissement qu'elles considèrent comme admissible au bénéfice de l'aide. Alors que cet investissement sera amorti sur une période de dix ans, les autorités ne veulent déduire du coût de l'investissement que les économies réalisées pendant deux ans, pour calculer les coûts ouvrant droit aux aides pour la protection de l'environnement. Le gouvernement flamand considère en effet que les investissements dont la durée de vie n'excède pas deux ans sont justifiés du point de vue économique et ne peuvent donc bénéficier d'aides pour la protection de l'environnement. Dans le cas où l'investissement présente manifestement des éléments liés à l'environnement et où sa période d'amortissement est supérieure à deux ans, le gouvernement flamand estime qu'il n'est pas acquis que l'entreprise procède à l'investissement en question. En conséquence, afin d'inciter les entreprises à mener à bien ces projets, les investissements dont la durée de vie est supérieure à deux ans peuvent bénéficier d'aides pour la protection de l'environnement et, afin de distinguer la partie purement économique d'un investissement de celle qui concerne la protection de l'environnement, les économies sont déduites du coût de l'investissement pour deux ans.

Toutefois, les règles communautaires stipulent que l'entreprise doit déduire des coûts admissibles au bénéfice de l'aide pour la protection de l'environnement tout avantage qu'elle obtient au titre d'un investissement destiné à réaliser des économies d'énergie. Il faut, pour ce faire, prendre en compte les économies réalisées durant toute la durée de vie économique de l'investissement, et pas uniquement pendant deux ans. La règle appliquée par les autorités belges ne concerne pas cette obligation, mais vise plutôt à exclure des aides pour la protection de l'environnement les investissements qui ne nécessitent pas de mesure incitative pour être effectués.



Les autorités belges ajoutent, dans leur dernière correspondance, que l'entreprise prévoit de réaliser, sur cette période de dix ans, des économies de coûts en énergie s'élevant à 510 075 887 BEF, mais de dépenser, sur cette même période, un montant supplémentaire de 485 533 829 BEF, réparti comme suit:

Taux d'intérêt	71 494 734 BEF
Frais financiers	173 399 095 BEF
Frais d'exploitation	188 000 000 de BEF.

Si on compare, sur une période de dix ans, les coûts supplémentaires et les économies sur lesquelles débouchera ce nouvel investissement, il en ressort qu'en termes nets, l'entreprise ne réalisera qu'une économie de 24 542 000 BEF.

L'argument ci-dessus selon lequel lorsque la durée de vie de l'investissement, c'est-à-dire dix ans, est prise en considération, seules les économies nettes devraient entrer en ligne de compte, ne saurait être accepté, car cela revient à subventionner les coûts d'exploitation et pas uniquement le coût de l'investissement initial. Les coûts supplémentaires que la société prétend devoir supporter du fait de l'investissement initial seront également supportés pour des investissements en matière de protection de l'environnement pour lesquels l'entreprise ne retire aucun avantage en termes de coûts.

Les autorités belges réitèrent toutefois leur position de départ concernant le montant de l'aide et la période de deux ans pendant laquelle elles déduisent les économies réalisées, une disposition qui figure dans le décret flamand correspondant. Elles ne prennent en compte que l'investissement initial pour le coût admissible au bénéfice de l'aide et ne déduisent pas, en réalité, les frais supplémentaires supportés par l'entreprise des économies réalisées.

## Conclusion

La Commission estime que tous les projets visent à protéger l'environnement. À l'exception de l'investissement portant sur les économies d'énergie (projet 6), l'ensemble des conditions fixées dans l'encadrement des aides pour la protection de l'environnement et le Code des aides à la sidérurgie sont remplies. Ainsi, en ce qui concerne les cinq premiers projets, l'intensité des aides reste nettement inférieure aux plafonds autorisés, tous les coûts ont trait à des mesures liées à la protection de l'environnement et les niveaux de pollution sont considérablement abaissés.

Toutefois, la Commission considère que l'aide notifiée dépasse les plafonds autorisés dans le cas de l'investissement destiné au projet 6. En effet, alors que les règles communautaires imposent à l'entreprise l'obligation de déduire des coûts du projet tout avantage obtenu au niveau des coûts de production, les autorités belges définissent d'une manière plus large les coûts admissibles. Elles proposent de déduire uniquement les économies réalisées pendant deux ans.

Le point 2.3 de l'encadrement des aides pour la protection de l'environnement stipule que les aides en faveur des économies d'énergie seront traitées comme des aides en faveur de l'environnement, compte tenu des économies de coûts en découlant pour l'investisseur. De même, d'après l'annexe au Code des aides à la sidérurgie, "tout avantage lié à un abaissement des

coûts de production qu'entraîneraient des niveaux notablement plus élevés de protection de l'environnement devra être déduit".

Pour déterminer tous les avantages qu'une entreprise retire d'un investissement, il faudrait prendre en compte toute la durée de vie dudit investissement. Toutefois, en l'absence de ces renseignements, on peut considérer que cette dernière correspond à la période d'amortissement de cet investissement. C'est la pratique adoptée par la Commission depuis l'entrée en vigueur de l'encadrement sur les aides pour la protection de l'environnement, notamment lorsqu'elle procède à l'appréciation de ces cas individuels.

En l'espèce, les autorités belges ont indiqué que la période d'amortissement/durée de vie de l'investissement était de dix ans. Si les économies qui seront réalisées étaient déduites pendant deux ans seulement, l'investissement aidé procurerait à l'entreprise un avantage au niveau de ses coûts pendant les huit années restantes, ce qui serait incompatible avec les règles communautaires.

La règle appliquée en Belgique, qui consiste, telle qu'elle est exposée ci-dessus, à déduire les économies réalisées pendant deux ans, concerne la nécessité de l'aide et ne signifie pas obligatoirement que l'investissement ne procure plus d'avantage à l'entreprise en termes de coûts au-delà d'une période de deux ans. Cette règle des deux ans ne saurait donc suffire pour considérer que la disposition communautaire définie au point 2.3 de l'encadrement sur les aides pour la protection de l'environnement est respectée. En conséquence, l'aide envisagée en faveur de cette partie du projet 6 ne semble pas satisfaire aux conditions définies dans l'encadrement des aides pour la protection de l'environnement et le Code des aides à la sidérurgie.

La Commission estime également que si le principe consistant à déduire tout avantage obtenu par l'entreprise en termes de coûts était appliqué déduisant uniquement les économies nettes, cela équivaldrait à accepter que les coûts d'exploitation soient admissibles au bénéfice des aides, contrairement à la pratique suivie en matière d'investissements exclusivement liés à la protection de l'environnement.

## Décision

Eu égard aux considérations qui précèdent, la Commission, conformément à la procédure fixée à l'article 6, paragraphe 5, du Code des aides à la sidérurgie, enjoint à la Belgique de lui présenter ses observations et de lui fournir toute information utile pour l'évaluation de l'aide, dans un délai d'un mois à compter de la réception de la présente. Elle invite vos autorités à transmettre immédiatement une copie de cette lettre au bénéficiaire potentiel de l'aide.

La Commission rappelle à la Belgique l'effet suspensif de l'article 6, paragraphe 5, du Code des aides à la sidérurgie et attire son attention sur la lettre à tous les États membres du 22 février 1995, dans laquelle il est précisé que toute aide octroyée illégalement pourra faire l'objet d'une récupération auprès de son bénéficiaire. Les montants ainsi récupérés incluront un intérêt calculé sur la base des taux de référence utilisés pour le calcul de l'équivalent-subvention dans le cadre des aides régionales, qui court à partir de la date à laquelle l'aide a été mise à la disposition du bénéficiaire, jusqu'à sa récupération effective.»

**Notificación previa de una operación de concentración****(asunto IV/M.1538 — DuPont/Sabancı)**

(1999/C 280/09)

**(Texto pertinente a efectos del EEE)**

1. El 23 de septiembre de 1999 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 del Reglamento (CEE) n° 4064/89 del Consejo <sup>(1)</sup>, modificado por el Reglamento (CE) n° 1310/97 <sup>(2)</sup>, la Comisión recibió notificación de un proyecto de concentración por el que El du Pont de Namours and Company (DuPont) (Estados Unidos) y Haci Ömer Sabancı Holding AS (Sabancı) (Turquía) adquieren el control conjunto, a efectos de lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 del artículo 3 del citado Reglamento, de una empresa común de nueva creación. La empresa en común investigará, desarrollará, fabricará y venderá productos de poliéster en Europa, la Commonwealth, Oriente Medio y África.

2. **Ámbito de actividad de las empresas implicadas:**

— DuPont: productos químicos, fibras artificiales, plásticos, productos agroquímicos, pinturas, semillas, productos farmacéuticos y otros materiales,

— Sabancı: textiles, poliéster, productos químicos, servicios financieros, cementos, sector automoción, alimentos, tabaco, distribución y otros.

3. Tras haber realizado un examen preliminar, la Comisión considera que la concentración notificada podría entrar en el ámbito de aplicación del Reglamento (CEE) n° 4064/89. No obstante, se reserva la posibilidad de tomar una decisión definitiva sobre este punto.

4. La Comisión insta a los terceros interesados a que le presenten sus observaciones eventuales con respecto a la propuesta de concentración.

Las observaciones deberán obrar en poder de la Comisión en un plazo máximo de diez días naturales a contar desde el día siguiente a la fecha de esta publicación. Podrán enviarse por fax [(32-2) 296 43 01 ó 296 72 44] o por correo, indicando la referencia IV/M.1538 — DuPont/Sabancı, a la dirección siguiente:

Comisión Europea  
Dirección General de Competencia (DG IV)  
Dirección B — Grupo Operativo de Operaciones de Concentración  
Avenue de Cortenberg/Kortenberglaan 150  
B-1040 Bruxelles/Brussel.

<sup>(1)</sup> DO L 395 de 30.12.1989, p. 1; rectificación en el DO L 257 de 21.9.1990, p. 13.

<sup>(2)</sup> DO L 180 de 9.7.1997, p. 1; rectificación en el DO L 40 de 13.2.1998, p. 17.

**Comunicación de la Comisión relativa a las licencias concedidas a empresas ferroviarias**

(1999/C 280/10)

Con arreglo al apartado 8 del artículo 11 de la Directiva 95/18/CE del Consejo, relativa a la concesión de licencias a las empresas ferroviarias, la Comisión ha de informar a los Estados miembros sobre la situación de las licencias concedidas. Se presentan a continuación los elementos principales referidos a la licencia concedida por la autoridad responsable indicada en el punto 2.

**1. Nombre y dirección de la empresa ferroviaria:**

A/S Lollandsbanen, Banegårdspladsen 5, DK-4930 Maribo

**2. Autoridad otorgante en el país en que tenga su sede la empresa ferroviaria:**

Inspección de Ferrocarriles, Vestervoldgade 123, 3., DK-1552 Copenhagen V

**3. Fecha de la decisión:**

18 de junio de 1999

Primera concesión

Suspensión

Revocación

Modificación

**4. Número de la licencia:**

5621.008/99-162.11

**5. Condiciones y obligaciones:**

Se concede la licencia bajo la condición de que se presente la documentación necesaria para la homologación del sistema de seguridad antes del 31 de diciembre de 1999.

**6. Observaciones referidas a la suspensión, revocación o modificación de la concesión:**

—

**7. Otras observaciones:**

El seguro de responsabilidad civil homologado cubre únicamente los daños en Dinamarca y deberá ampliarse en la medida en que la empresa ferroviaria desea extender su actividad fuera de Dinamarca.

**8. Persona de contacto de la autoridad otorgante:**

(nombre, apellidos, número de teléfono y de fax y dirección electrónica)

Sr. Per Strand, Tel. (45) 33 95 43 34, Fax (45) 33 14 18 50  
pst@jernbanetilsynet.dk

---

## III

*(Informaciones)*

## COMISIÓN

**Anuncio a los agentes económicos en relación con las operaciones de suministro gratuito de productos agrícolas a la Federación de Rusia contempladas en el Reglamento (CE) n° 2802/98 del Consejo <sup>(1)</sup>**

(1999/C 280/11)

El segundo plazo de presentación de las ofertas correspondientes a las licitaciones abiertas por los Reglamentos que se mencionan a continuación queda abierto hasta el 5 de octubre de 1999 a las 12 horas (hora de Bruselas) para los lotes siguientes:

1. Reglamento (CE) n° 1955/1999 <sup>(2)</sup> relativo al transporte de carne de porcino con destino a Rusia:

— lote n° 1.

---

<sup>(1)</sup> DO L 349 de 24.12.1998, p. 12.

<sup>(2)</sup> DO L 242 de 14.9.1999, p. 13.